



REPÚBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

16^a REUNIÓN – 2^a SESIÓN EXTRAORDINARIA

21 y 22 DE DICIEMBRE DE 2011

Presidencia del señor vicepresidente de la Nación, don **AMADO BOUDOU**,
de la señora presidenta provisional del Honorable Senado,
senadora **BEATRIZ ROJKÉS de ALPEROVICH**,
y del señor vicepresidente del Honorable Senado, senador **GERARDO RUBÉN MORALES**

Secretarios:

Señor **JUAN H. ESTRADA** y señor **JUAN H. ZABALETA**

Prosecretarios:

Señor **LUIS G. BORSANI**, señor **MARIO DANIELE** y señor **GUSTAVO CARLOS VÉLEZ**



PRESENTES:

AGUIRRE DE SORIA, Hilda C.
 ARTAZA, Eugenio J.
 BARRIONUEVO, Walter B.
 BASUALDO, Roberto G.
 BERMEJO, Rolando A.
 BIANCALANI, Fabio D.
 BLAS, Inés I.
 BONGIORNO, María José
 BORELLO, Marta T.
 CABANCHIK, Samuel M.
 CABRAL ARRECHEA, Salvador
 CANO, José M.
 CASTILLO, Oscar A.
 CIMADEVILLA, Mario J.
 COLAZO, Mario J.
 CORRADI de BELTRÁN, Ana María
 CORREGIDO, Elena M.
 DE LA ROSA, María Graciela
 DI PERNA, Graciela A.
 DÍAZ, María Rosa
 ESCUDERO, Sonia M.
 ESTENSSORO, María Eugenia
 FELLNER, Liliana B.
 FERNÁNDEZ, Aníbal
 FILMUS, Daniel F.
 FUENTES, Marcelo J.
 GIMÉNEZ, Sandra D.
 GIUSTINIANI, Rubén H.
 GODOY, Ruperto E.
 GONZÁLEZ, Pablo G.
 GUASTAVINO, Pedro G.
 GUINLE, Marcelo A.
 HIGONET, María de los Ángeles
 IRRAZÁBAL, Juan Manuel
 ITURREZ de CAPELLINI, Ada del Valle
 JUEZ, Luis A.

LABADO, María Esther
 LATORRE, Roxana I.
 LEGUIZAMÓN, María Laura
 LINARES, Jaime
 LÓPEZ, Osvaldo R.
 LORES, Horacio
 LUNA, Mirtha M.
 MANSILLA, Sergio F.
 MARINO, Juan C.
 MARTÍNEZ, Alfredo A.
 MAYANS, José M.
 MEABE, Josefina A.
 MENEM, Carlos S.
 MONLLAU, Blanca M.
 MONTERO, Laura G.
 MORALES, Gerardo R.
 MORANDINI, Norma E.
 NEGRE de ALONSO, Liliana T.
 NIKISCH, Roy A.
 PARRILLI, Nanci M.
 PÉREZ ALSINA, Juan A.
 PÉRSICO, Daniel R.
 PETCOFF NAIDENOFF, Luis C.
 PICHETTO, Miguel Á.
 REUTEMANN, Carlos A.
 RIOFRÍO, Marina R.
 RODRÍGUEZ SAÁ, Adolfo
 ROJKÉS de ALPEROVICH, Beatriz L.
 ROLDÁN, José M.
 ROMERO, Juan C.
 RUIZ DÍAZ, Elsa B.
 SANZ, Ernesto R.
 VERA, Arturo
 VERANI, Pablo

AUSENTES, CON AVISO:

RACHED, Emilio A.
 VERNA, Carlos A.

SUMARIO

1. **Izamiento de la bandera nacional.** (Pág. 3)
2. **Manifestaciones acerca del sistema de votación y del procedimiento para la sesión.** (Pág. 3)
3. **Plan de labor.** (Pág. 3)
4. **Asuntos entrados.** (Pág. 3)
5. **Beneplácito por decisión del gobierno del Uruguay.** (Pág. 4)
6. **Pesar por el fallecimiento de Iván Heyn.** (Pág. 4)
7. **Acuerdos.** (Pág. 4)
8. **Régimen de trabajo agrario.** (O.D. N° 921/11.) (Pág. 6)
9. **Ley de presupuesto y normas afines.** (O.D. N° 915/11, O.D. N° 916/11, O.D. N° 917/11, O.D. N° 918/11 y O.D. N° 919/11.) (Pág. 43)
10. **Modificación de un artículo de la Ley de Impuestos a las Ganancias.** (O.D. N° 918/11.) (Pág. 128)
11. **Prórroga del derecho a la exportación de hidrocarburos.** (O.D. N° 919/11.) (Pág. 129)
12. **Mensajes del Poder Ejecutivo solicitando acuerdos.** (Pág. 129)
13. **Modificaciones al Código Penal y a la Ley Penal Tributaria.** (O.D. N° 924/11, O.D. N° 923/11 y O.D. N° 922/11.) (Pág. 132)

14. **Cuarto intermedio.** (Pág. 160)15. **Apéndice:**I. **Plan de labor.** (Pág. 161)II. **Asuntos entrados.** (Pág. 162)III. **Asuntos considerados y sanciones del Honorable Senado.** (Pág. 222)IV. **Actas de votación.** (Pág. 443)V. **Inserciones.** (Pág. 491)

—En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 10 y 40 del miércoles 21 de diciembre de 2011:

Sr. Presidente. — Habiendo quórum, queda abierta la sesión extraordinaria.

1

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. — Invito a la señora senadora por Río Negro, María José Bongiorno, a proceder al izamiento de la bandera nacional en el mástil del recinto.

—Puestos de pie los presentes, la señora senadora Bongiorno procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (*Aplausos.*)

2

MANIFESTACIONES ACERCA DEL SISTEMA DE VOTACIÓN Y DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SESIÓN

Sr. Presidente. — El secretario parlamentario va a hacer algunas consideraciones con respecto al sistema de votación.

Sr. Secretario (Estrada). — Queríamos recordar que ha cambiado el sistema, debido a que carecemos de las tarjetas y no ha sido posible reemplazarlas.

Consecuentemente, se vota por banca. Así que cuando se va a proceder a una votación, el senador que se encuentre fuera de su banca debe dirigirse a la misma para votar, porque si vota desde otra banca se va a prestar a confusión y va a aparecer votando otro senador y no él.

Por eso, en el momento de votación, cuando sea votación nominal, tiene que votar cada senador desde su banca.

Recuérdeno, por favor, porque lo de la tarjeta ha quedado ya fuera de acción, debido a que no ha sido posible reemplazarlas.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Pichetto.

Sr. Pichetto. — Señor presidente: ya que estamos en cuestiones que hacen al procedimiento, si bien ayer no lo conversamos, estamos frente a una agenda realmente muy larga, y hay una costumbre incorporada en el ámbito del Congreso, que es que los miembros informantes tengan un tiempo disponible de media hora —siempre es un plazo flexible, por supuesto—, y después, cada senador, diez minutos; los presidentes de bloque también disponen de media hora.

Así que, si estamos de acuerdo sobre este esquema, me gustaría ratificarlo antes de que empiece el tratamiento de los temas.

Sr. Presidente. — ¿Algún senador quiere hacer alguna consideración al respecto?

Tiene la palabra el senador Petcoff Naidenoff.

Sr. Petcoff Naidenoff. — Señor presidente: en la misma línea, estamos de acuerdo con la metodología que siempre se ha implementado.

Sr. Presidente. — Seguiremos con los usos y costumbres, entonces, senador Pichetto.

3

PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. — Obra sobre las bancas el plan de labor parlamentaria que fue aprobado en la reunión del plenario de ayer.¹

En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—Se practica la votación.

Sr. Presidente. — Aprobado.

4

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. — De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del reglamento, la Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio de Intranet de la lista de asuntos ingresados hasta la fecha, a efectos de que los señores senadores eventualmente se sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes.²

¹ Ver el Apéndice.

² Ver el Apéndice.

tez, don Néstor Edgardo Maidana, don Héctor Osvaldo Viano.

Escalafón infraestructura: don Jorge Antonio Recalt, don Tito Oscar Graf.

Escalafón medicina: don Horacio Marcelo Hunicken, don Horacio Daniel Ates Etcheberry, don Edgardo Laghi Celeri, don César Marcelo Antonio Dominella, don Eduardo José Herreros, don Eduardo Aníbal Lillia, don Eduardo José Funes, don Juan Norberto Domínguez.

Escalafón jurídico: don José Luis Vigil.

Escalafón bioquímica: don Daniel Oscar Barriola, don Ricardo Daniel Vadala, doña Adriana Edith Vázquez.

Escalafón ingeniería: don Oscar César Martínez Lager, don Néstor Andrés Pia Cano, doña Alicia Avelina Matilde Sedeño, don Carlos Alberto Capella, don Luis Alberto Gómez, don Jorge Néstor Leiva, don Miguel Ángel Melotta, don Francisco Eduardo Saccinto.

Escalafón odontología: don Adrián Jorge Oule.

Escalafón meteorología: don Eduardo Alberto Viotti.

Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados oficiales reúnen las condiciones exigidas por la ley 19.101, ley para el personal militar.

Asimismo, de la información suministrada por la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos surge que no se hallan antecedentes que vinculen a los oficiales superiores y jefes propuestos con causas por violaciones a los derechos humanos y/o causas contra el orden constitucional.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Se da ingreso a los acuerdos y se giran a la Comisión de Acuerdos.

13

O.D. N° 924/11, O.D. N° 923/11 Y O.D. N° 922/11 MODIFICACIONES AL CÓDIGO PENAL Y A LA LEY PENAL TRIBUTARIA

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Corresponde considerar los dictámenes de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales en el proyecto de ley en revisión por el que se incorporan al título XIII del Código Penal de la

Nación las principales conductas punibles que afectan el orden económico, en el proyecto de ley en revisión por el que se modifica el Código Penal de la Nación en materia de investigación y sanción de las actividades delictivas con finalidad terrorista, y en el proyecto de ley en revisión por el que se modifican diversos artículos de la Ley Penal Tributaria y el artículo 76 bis del Código Penal de la Nación. (C.D.- 88/11, C.D.-87/11 y C.D.-86/11.)

En consideración en general.

Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Señor presidente: vamos a plantear que los tres proyectos de ley se debatan en general y luego se vote en particular cada uno de ellos.

Por nuestro bloque, el miembro informante será el señor senador Guastavino.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador Guastavino.

Sr. Guastavino. – Señor presidente: en primer lugar, quiero dar gracias al jefe de mi bloque por darme la oportunidad de informar sobre los tres proyectos de ley en revisión.

En segundo lugar, creo importante que brevemente haga algunas consideraciones en el contexto en que van a ser tratadas las iniciativas en cuestión.

La Argentina, a partir de 2003, comenzó una tarea de recuperación de su lugar en el mundo. Las consecuencias de la crisis fueron recordadas ayer en todo el país.

Con Néstor Kirchner se salió a recuperar el lugar que se había perdido en el mundo. Y se lo hizo contando lo que había ocurrido en la Argentina y por qué había ocurrido lo que ocurrió. Y de qué manera pensábamos salir adelante, desde nuestras convicciones y con nuestro esfuerzo, para volver a reconstruir este país que había caído, prácticamente, al borde de la disolución.

Así, con mucha fuerza y con mucha entereza marcamos claramente en el contexto internacional lo que había pasado y cuáles habían sido las responsabilidades y de quiénes habían sido éstas. Esto lo denunció Néstor Kirchner ante más de un organismo internacional, indicando quiénes habían tenido la responsabilidad de dicha situación, es decir, los sectores financieros, del capital, los organismos multilaterales de crédito –los cuales habían llevado con sus

políticas a dicha situación— y el neoliberalismo. Todos éstos contribuyeron a construir el país del desastre, que terminó en la situación que todos conocemos.

También dijimos que queríamos reconstruir este país, y pedimos que nos creyeran y que nos dejaran crecer, porque íbamos a honrar los compromisos que había asumido la Argentina como nación en el contexto mundial.

Creo que la bisagra en la relación con el mundo, y quizás la decisión con la cual dimos vuelta la página de esa historia, fue cuando decidimos pagarle al Fondo Monetario Internacional la deuda pesada que teníamos, que nos amordazaba y frenaba en nuestro crecimiento, con una quita del 70 por ciento. Eso significó para el país un ahorro de miles y miles de dólares, con el consecuente beneficio que le trajo a nuestro crecimiento. Así el país decidió que iba a salir de la crisis, del infierno y del fondo del mar, con producción, con generación de empleo, con mercado interno, con consumo, impulsando la industria y generando empleo. Así decidimos que íbamos a salir adelante y que, de esa forma, íbamos a empezar a honrar nuestros compromisos, como dije al principio.

Por otro lado, también a nivel regional en nuestra patria grande comenzamos a definir políticas muy claras de crecimiento y de integración regional, para buscar fortalecernos en la región y con el fin de intentar corregir las asimetrías que tanto daño nos hicieron en toda nuestra historia, a partir de la asunción en distintos países de presidentes que tenían el mismo concepto de país, de patria grande, así como iguales conceptos ideológicos y el mismo pensamiento.

En este sentido, el liderazgo de Néstor Kirchner en aquel momento fue sumamente importante, más aún con la creación de la UNASUR, y creo que ha habido en ese contexto discursos, como el último de la presidenta ante el G-20, que son de gran claridad y contundencia, porque allí se le ha marcado claramente al mundo lo que se está viviendo en este momento. Por ejemplo, la crisis que arrasa la eurozona, con países como Grecia y Portugal en tan malas condiciones; lo que ocurrió también con Lehman Brothers; la estafa o fraude de Madoff; el caso Enron, etcétera. Frente a todo esto, la presidenta ha marcado con claridad la situación, porque nosotros la

vivimos y no porque nos la hayan contado, señalando las causales de la crisis de los pueblos, que tienen que ver con el capitalismo y, sobre todo, con aquellos sectores del poder económico, financiero y especulativo que a partir de políticas de endeudamiento someten a los países a las crisis más profundas con las consecuencias de hambre que aquí hemos sufrido.

En ese marco, también la Argentina ha recuperado el rol del Estado en el control y en la regulación de la economía, y ha tomado algunas decisiones que tienen que ver inclusive con otorgar mucha importancia a la participación de nuestro país en el GAFI –Grupo de Acción Financiera Internacional–, organismo intergubernamental que tiene el propósito de promover políticas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. En este marco, obviamente, ha sido necesario ir adecuando normativas y acordando políticas y estrategias para, justamente, poder compatibilizar la situación con los distintos países que integran el GAFI, para la definición de políticas comunes que apunten, justamente, a combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

En este contexto es en el que venimos a tratar estos dos proyectos de ley que ya cuentan con la sanción de la Cámara de Diputados. El primer proyecto es el C.D.-88/11, que tiende a castigar, prevenir y reprimir actividades que ponen en riesgo a los mercados. Nosotros aquí hemos vivido esa situación.

Cuando algunos senadores argumentaron aquí su postura con referencia a la ley de presupuesto, marcaron hechos que ha vivido la Argentina en distintos períodos, en los que queda absolutamente demostrado de qué manera las actividades ilícitas en el manejo de los mercados pueden complicar o generar situaciones de mucho riesgo para los gobiernos. Hay ejemplos para dar. Por eso, este proyecto de ley incorpora figuras penales con el fin de dotar de mayor transparencia a la actividad bursátil, a la actividad de los mercados, que son figuras que hoy no tipifican claramente sus acciones.

Por lo tanto, en principio, este proyecto de ley plantea la incorporación de cinco cuestiones específicas al Código Penal. La primera tiene que ver con la información privilegiada no pública. Hay un caso paradigmático que, seguramente, ustedes lo han de recordar: es el caso

“Terrabusi c/Nabisco”. Guillermo Montagna compró acciones de su empresa, que vendió luego, generando una ganancia muy voluminosa a partir de manejar información privilegiada que no era pública.

El segundo aspecto que se incorpora es la manipulación de los mercados, que tiene que ver con alterar artificialmente las cotizaciones de los mercados con el fin de desestabilizar la economía de un país.

La Argentina tiene muchas experiencias de corridas bancarias inducidas por grandes grupos económicos, y no ahora. La presidenta de la Nación ha denunciado hace poquitos días que la Argentina tuvo cinco corridas bancarias. El propio senador Fernández, al argumentar la ley de presupuesto, también hizo referencia al costo que le trajeron a nuestro país estas corridas bancarias que, como todos sabemos, fueron inducidas con la intencionalidad clara de producir una crisis económica.

Estas dos incorporaciones a las cuales hice referencia, que son la información privilegiada no pública y la manipulación del mercado, habían sido sugeridas y recomendadas en el Grupo de Acción Financiera Internacional.

El tercer punto es la intermediación irregular. Tiene que ver con la intermediación financiera sin autorización del Estado, lo que se denomina y todos conocemos como las mesas de dinero o las cuevas que operan sin autorización del Estado. Intermedian y, naturalmente, afectan la economía.

El cuarto punto es la intermediación fraudulenta. En sentido contrario al caso anterior, son aquellos que, teniendo autorización del Estado, realizan conductas contrarias a la transparencia.

El quinto punto es la estipulación de un agravante para quienes tienen mayor responsabilidad en función de su jerarquía, ya sean ejecutivos, directores de empresas o funcionarios públicos.

Éstas serían las incorporaciones al Código Penal del primer proyecto, el C.D.-88/11, que –como dije al principio– tiende a castigar, prevenir y reprimir actividades que ponen en riesgo a los mercados.

El otro proyecto es el C.D.-87/11, de prevención, investigación y sanción de actividades delictivas con finalidad terrorista.

El mundo ha sufrido ataques terroristas que todos conocemos. Todos hemos vivido con horror el atentado contra las Torres Gemelas; al aeropuerto de Moscú; a la estación de Atocha, en Madrid. En la Argentina, en la última década del siglo XX hemos vivido dos atentados tremendos, como fueron los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel.

En cuanto al atentado a la AMIA, fue durante el gobierno del presidente Kirchner cuando hubo un reconocimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la responsabilidad del Estado argentino en la no prevención, en no haber tenido políticas de prevención para evitar ese atentado que significó 85 muertos y muchos heridos. Ello motivó también que, aquí, en su momento, tratáramos una ley aprobada por unanimidad de resarcimiento para las víctimas y damnificados en aquel atentado.

Nuestro país también adhirió a las convenciones tendientes a reprimir el terrorismo y su financiamiento. Me estoy refiriendo, concretamente, a las leyes 20.023 y 20.024 y a la ley 26.683, de lavado de activos, para reprimir este tipo de actividades.

Es necesario hacer referencia a que estos grupos terroristas actúan permanentemente mutando su capacidad operativa y buscando distintas superaciones en el terreno tecnológico y en su autofinanciamiento, lo que obliga a las legislaciones de los países a adecuar sus normas para prevenir la realización de estos actos terroristas.

Mediante el proyecto que tenemos en discusión se incorpora a la parte general del Código Penal un nuevo agravante, con lo que se intensifica la pena de cualquier delito que sea cometido con finalidad terrorista. De esta manera, se continúa con la línea trazada en los últimos años, donde se pone de manifiesto el especial compromiso que ha asumido la Argentina de avanzar en un sistema concreto de prevención que sea efectivo. Seguramente, falta mucho por hacer, pero todo esto propende a que vayamos encontrando un sistema que nos permita prevenir cualquier delito de esta naturaleza.

Este proyecto de ley también está inspirado en la Convención Interamericana contra el Terrorismo –que es la ley 26.023– y en el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, que en nuestro

país tomaron forma de ley y que este Congreso sancionó en 2005.

A través de esta iniciativa, se pretende incorporar un nuevo artículo a la parte general del Código Penal que especifica en forma clara y precisa que, en el caso de cualquier delito contemplado en la legislación argentina que se cometa con la finalidad terrorista descrita en el Código Penal e instrumentos internacionales aprobados por nuestro país, se incrementará su pena el doble del mínimo y del máximo.

De esta forma, se incorpora un agravante y no un delito autónomo al Código Penal, tal vez, resguardando algo sobre lo que hemos hablado en más de una oportunidad aquí y que fue sostenido por muchos profesionales con más conocimiento que yo en esta materia: al Código Penal se le han incorporado tantas cosas que, al final, es sumamente necesario que definitivamente –ojalá podamos hacerlo– trabajemos en la redacción de un texto definitivo. A su vez, se reformula y reubica el delito de financiación del terrorismo y en el proyecto queda terminantemente excluida, obviamente, cualquier posible interpretación criminalizante de los hechos de protesta social.

Por último, se incorpora la facultad del titular de la Unidad de Información Financiera para congelar activos que se sospeche serán destinados a financiar la actividad delictiva del terrorismo. El congelamiento de activos se justifica porque, ante la sospecha cierta de la existencia de financiamiento de alguna actividad de esta índole, hay que tomar una decisión absolutamente rápida a efectos de que no sean utilizados. En definitiva, el juez decidirá posteriormente si la medida es procedente o no.

En concreto, lo fundamental que se incorpora al Código Penal es el artículo 41 quinquies, que establece que cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población, la escala penal se incrementará en el doble del mínimo y del máximo. Si la finalidad fuese la de obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, se aplicará la misma escala siempre y cuando no se trate del ejercicio de un derecho constitucional.

También se agrega el artículo 306, según el cual será reprimido con prisión de 5 a 15 años y multa de 2 a 10 veces el monto de la operación el que directa o indirectamente recolectare o proveyere bienes o dinero a sabiendas de que serán utilizados en todo o en parte para financiar la comisión de un delito que tuviere la finalidad prevista en el artículo 41 quinquies, independientemente de su acaecimiento.

Hago la salvedad de que, a partir de algunos cuestionamientos que se realizaron a raíz de la criminalización de la protesta social, se le agrega al artículo 41 quinquies, después de lo que les leí, un párrafo indicando que los agravantes previstos en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieron lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional. Esto fue agregado en Diputados al proyecto original para salvaguardar algunos cuestionamientos o planteos de otros sectores de la oposición.

Pasaré a fundamentar el proyecto de ley que sigue, cuyo número de expediente es C.D.-86, Orden del Día N° 922, por el que se modifican la ley 24.769 –Ley Penal Tributaria–, sus modificatorias y el Código Penal Argentino.

Hace aproximadamente quince días, producto de una investigación que llevó poco más de seis meses y por orden del juez a cargo del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, el doctor Pimentel, se le ordenó a Gendarmería el allanamiento de la sede de acopio de una empresa líder en negocios agropecuarios no solamente de la provincia de Entre Ríos sino también de la región. Al mismo tiempo, se realizaron allanamientos en tres o cuatro sedes de esa empresa en la ciudad de Gualaguaychú, en las que los contadores llevaban los libros del establecimiento. Se tomaron esas medidas porque había indicios surgidos de la investigación en el sentido de que había habido evasión fiscal en sus diversas categorías o jerarquías por más de 10 millones de pesos.

Se trataba de una empresa dedicada a varios negocios agropecuarios, cuyo titular –hablamos de la ciudad de Gualaguaychú que, quizás, fue el epicentro del reclamo de la patronal del campo– era uno de los activos promotores del corte de la ruta 14, acceso emblemático del Mercosur. Con mucha visión, el ex presidente Kirchner

consideró que había que hacer la autopista porque sería una arteria de integración con el Mercosur —con Paraguay, con Brasil—. En el sueño de la integración latinoamericana, ésta iba a ser la ruta del comercio, del intercambio comercial y demás. Este señor, por muchos días, promovió el corte de ruta en el kilómetro 53, junto a aquel personaje del que se ocuparon de llevarlo a cuanto programa televisivo había y que se arrogó por un tiempo el derecho de decidir quién circulaba o quién no circulaba por esa ruta, produciéndoles un daño muy importante al país y, sobre todo, a mi provincia.

Hubo un caso que lo cuento porque me conmovió: ruta cortada en el kilómetro 53. Un trabajador transportista estaba haciendo cola y se arrimó hasta donde estaba el corte y dijo que él estaba transportando pollos de un frigorífico de la región de la costa de Uruguay y de mi provincia, Entre Ríos, y que tenía que llegar a destino. Este personaje se dio vuelta y dijo: “Muchachos, ¿los pollos pasan? No; los pollos no pasan”. Este transportista se volvió, naturalmente, con mucha bronca por no poder cumplir con su destino y su trabajo y, además, fue el ejemplo del daño producido a una industria que hoy es líder: la industria avícola de mi provincia, que hoy es la principal exportadora de pollos del país. El daño es porque la producción de pollos es a tiempo: nacen, hay que alimentarlos, y cuando se termina y llegan a su tiempo de crecimiento, hay que faenarlos y distribuirlos. Cuando se rompe esta cadena, se arma un desastre. A la actividad de esta industria floreciente en Entre Ríos, esto le hizo mucho daño.

Me fui de tema, pero tiene que ver con esto, porque estamos hablando de grandes evasores. Casualmente, los que más rentabilidad han tenido con las políticas de este gobierno todo este tiempo parece mentira que estuvieran en esta situación. Seguramente, habrá distintos casos a lo largo y a lo ancho del país. Por lo tanto, la ley que venimos a modificar es la 24.769, que fue sancionada en 1996. Por el tiempo transcurrido y, obviamente, la experiencia adquirida, es necesario propiciar una reforma. Es necesario adecuar los importes mínimos exigidos para considerar tipificada la evasión como delito.

Esta medida posibilitará disminuir el flujo de nuevas causas porque, con la ley de 1996, los mínimos han quedado reducidos. Lo que ocurre

es que hay pequeños evasores que, por esta ley, inundan las causas. En verdad, lo que aquí hay que buscar es a los grandes evasores. Obviamente, hay que continuar con la persecución administrativa con los pequeños evasores; pero hay que apuntar a buscar a los grandes evasores. Esta medida, como digo, posibilitará disminuir el flujo de nuevas causas y concentrará recursos judiciales en los grandes evasores.

Se incorpora un tipo penal específico: cuando se modificaren o adulteraren sistemas informáticos o equipos electrónicos suministrados u homologados por el fisco nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma. Se impone pena a las personas jurídicas que cometieren esos hechos delictivos.

Se elimina el instituto de la extinción de la acción penal por pago. Hoy, a aquel evasor que va y paga, automáticamente, se le extingue la acción penal. En este caso, con esta modificación, por más que pague, sigue la acción penal.

Se incorpora así como causa absolutoria, y por lo tanto exento de responsabilidad penal, a quien espontáneamente regularice su situación, siempre y cuando su presentación no sea a raíz de una inspección o de una observación por parte de la repartición fiscalizadora o de denuncia.

Se establece que no va a ser de aplicación el instituto de la suspensión de juicio, o la *probation*. Queda sin efecto la *probation* en delitos de evasión fiscal.

Para finalizar con esta presentación de mi fundamentación de estos tres proyectos de ley que vienen con sanción de la Cámara de Diputados, el bloque de senadores del Frente para la Victoria propondrá que sean aprobados los tres proyectos tal cual fueron girados.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). — Tiene la palabra el senador Sanz.

Sr. Sanz. — Al revés del señor miembro informante, voy a comenzar con el análisis del último de los proyectos que acaba de mencionar, que son las reformas a la ley penal tributaria. En este caso, nuestro bloque adelanta el acompañamiento en general con algunas disidencias en particular, que vamos a plantear.

El acompañamiento en general, obviamente, tiene que ver con que estamos compartiendo el criterio central, que es el de adecuar los montos sancionatorios de esta ley a partir de los cuales

comienza a regir el principio de la evasión, por cuanto habían quedado desfasados en el tiempo. La multiplicación por cuatro, si bien puede ser opinable porque son cuestiones numéricas, hoy se ajusta mejor al propósito original de la ley, que era el de la persecución a los grandes evasores.

Estamos ante un proyecto respecto del que compartimos su espíritu. Endurece la posición del Estado frente a un delito que no es común, es un delito contra la sociedad, es un delito contra todos, como es el de la evasión.

Los ejes del proyecto son cinco. Se han dicho, pero los repito muy sintéticamente. Primero, la adecuación de los montos mínimos que funcionan como condición objetiva del tipo penal; segundo, la reformulación de las agravantes, contemplando expresamente la utilización de las denominadas “facturas apócrifas” como supuesto de evasión; tercero –y éste es un tema novedoso que traerá mucha cola en la interpretación judicial–, la ampliación de la política criminal contra la evasión, alcanzando a los tributos locales y provinciales. Nosotros estamos fijando como tipo penal la evasión no solamente de los impuestos nacionales sino también de los tributos locales, que, hasta este momento, no estaban alcanzados por la jurisdicción federal. Éste es un tema que –insisto– va a traer mucha discusión en materia jurisprudencial.

Acá es donde nosotros, en particular, vamos a hacer una propuesta para tratar de evitar algo que se puede dar en la práctica y que ya estuvo presente en el debate en Diputados: el hecho de que la Nación va a tener no solamente la posibilidad del tipo penal sancionatorio sino también que, frente a una moratoria, que es el caso concreto, va a poder utilizar la acción penal no como obstáculo sino al contrario: corriéndola como obstáculo para la consecución de los efectos de la moratoria. No así los gobiernos provinciales, según el articulado que queda en el dictamen de mayoría.

Por lo tanto, nosotros, en este tema puntual, vamos a sugerir otra redacción, incluyendo el caso de que los gobiernos provinciales podrán, en el ámbito de su competencia, otorgar a los imputados la posibilidad de acogerse voluntariamente a un régimen de regularización impositiva; y, en estos casos, se suspenderá la acción penal, que podrá reanudarse previa intimación

del organismo recaudador ante el incumplimiento de un pago o de una obligación. Y mientras se halla suspendida la acción penal, también se suspenderá la prescripción de la acción en los términos del artículo 67 del Código Penal. De esta manera, creemos que se está otorgando igualdad de condiciones, atento a que la evasión va a ser una sola, independientemente de la jurisdicción –los gobiernos locales respecto del gobierno nacional–.

El cuarto tema es el endurecimiento de la respuesta sancionatoria al impedir la aplicación del instituto de la suspensión del juicio a prueba: la denominada *probation*. Éste es otro tema que va a traer complicaciones al momento de interpretar, porque la suspensión del juicio a prueba no puede ser determinada para algunos delitos sí y para otros no, cuando se refieren a tipos penales concomitantes en cuanto a los órdenes sancionatorios. Entonces, se está violando aquí un principio de igualdad en el cumplimiento de la pena, que será motivo, obviamente, de discusiones. En el caso particular nuestro, pensamos que esto, al afectar el principio de igualdad, tiene un rasgo de inconstitucionalidad que podríamos y deberíamos salvar. En este caso del régimen de suspensión del juicio a prueba, artículo 19 del dictamen, tenemos un punto de disidencia.

Por último, incorpora la ley un régimen sancionatorio de significativa gravedad y amplitud para las personas jurídicas. En esto, más allá de las discusiones, Zaffaroni ha escrito mucho y se ha opuesto por considerar al derecho penal vinculado a las personas físicas y no a las jurídicas. Pero nosotros seguiremos una corriente doctrinaria que permite la tipificación vinculada a la conducta de las personas jurídicas. En Diputados se discutió esto muy ampliamente y creo que, en este caso particular, por no tener disidencias, nosotros lo vamos a acompañar.

Estoy exponiendo muy sintéticamente. Éste fue el proyecto de Ley Penal Tributaria. Me quiero concentrar en las otras dos iniciativas, porque allí tenemos diferencias profundas que ameritan que, tanto en el tema del lavado como en el del terrorismo, nuestro bloque haya presentado dos dictámenes en minoría.

En ambos casos, estamos frente a dos proyectos que surgen de la vinculación de nuestro país como miembro integrante del GAFI. En

tal sentido, lo primero que se nos ocurre como reflexión general con respecto a los dos proyectos es que hay una sobreactuación legislativa del Poder Ejecutivo frente a las recomendaciones del GAFI. Porque lo que hay que tener en cuenta en este tema que nos ocupa desde hace ya bastante tiempo, y sobre el que hemos tenido como país conductas pendulares —a veces, hemos estado muy alejados y, otras veces, por querer estar demasiado cercanos, como ahora, cometemos algunos errores—, es que el GAFI lo que cuestiona es la situación global de la legislación y de la actitud de la gestión vinculada con el lavado de dinero.

Cuando se discute la globalidad, no es solamente una cuestión de legislación penal. Es también una cuestión de aplicación de la legislación vigente. Es una cuestión de gestión que involucra a todos los poderes del Estado. En el caso nuestro, obviamente, es la legislación. En el caso del Ejecutivo, tiene en sus manos herramientas vinculadas con las fuerzas de seguridad, que tienen que ver con la gestión, con la persecución, con la investigación y con la prevención. Y en el caso de la Justicia, ni hablar. Lo dije cuando discutimos la legislación anterior, hace pocos meses: de los tres poderes del Estado, si yo tuviera que hacer hincapié en cuál es el que más atrasado está o el que más defectuosamente ha aplicado las recomendaciones del GAFI, es el Poder Judicial. Sigo insistiendo. No tengo la menor duda. Pero volviendo a la opinión o a la reflexión general creo que se pretende disimular, con esta suerte de sobreactuación legislativa, un problema de gestión. Y como entonces hay una respuesta, a mi juicio, sobreactuada, empiezan los problemas de tipicidad penal y el principio de legalidad. Acá es donde está nuestra crítica profunda a los dos temas: al de lavado y al de terrorismo. La cuestión de la tipicidad penal y el principio de legalidad.

Esos dos principios del derecho penal exigen una clara definición de la conducta incriminada, que fije los elementos de la conducta y que, a la vez, permita deslindarlos de dos ámbitos que, precisamente, son distintos al delito, que son los comportamientos no punibles y las conductas ilícitas sancionables, pero con medidas no penales —que tienen sanciones de otro tipo, que no son las penales—, como son las administrativas.

Ahora, cuando en la definición penal el núcleo central de la tipificación es ambiguo y genera dudas, empezamos a transitar un camino peligroso. Empezamos a transitar el peligroso camino del arbitrio de la autoridad. Si bien cualquier arbitrio o cualquier ámbito de arbitrariedad o de discrecionalidad es reprochable en cualquier ámbito, particularmente esto es más reprochable, más indeseable, y tenemos que ser más cuidadosos cuando se trata de juzgar la responsabilidad penal de los individuos o de establecer sanciones que afectan derechos fundamentales.

Acá es donde nosotros no podemos ser ambiguos, no podemos darnos el lujo de generar dudas, discrecionalidades, e inclusive interpretaciones, en un sistema judicial como el nuestro. Estoy seguro de que el senador Pichetto tal vez podrá compartir esta parte, en un sistema judicial como el nuestro, con tantas disputas académicas —por decir así— que ensalzan las individualidades de los jueces, ensalzan sus egos y sus vanidades, pero que terminan resintiendo al final del camino el sistema judicial en sí. Esto lo vemos en muchos casos. Cuando hay un tema opinable, por una cuestión de idiosincrasia, más que en la búsqueda de una solución efectiva y concreta, se transforma en una disputa académica sobre doctrinas y teorías que nos alejan del resultado buscado, que es hacer justicia. Ésta es una opinión subjetiva, pero sé que algunos la comparten.

Entonces, es importante cumplir con el GAFI, pero hay que hacerlo desde la capacidad real de persecución de las organizaciones criminales que se dedican al lavado de dinero. Y la verdad es que después de diez años, en la Argentina ahora nos estamos poniendo a tono con la legislación, pero prácticamente no ha habido muchas condenas en este ámbito.

Fíjense: el GAFI, entre tantas cosas de las que no se obtiene todavía respuesta, señala que en la Argentina no hay autoridad competente para supervisar los casinos. Éste es un típico problema de gestión, que no lo vamos a resolver ni con legislación ni con otras cosas, sino que hay que resolverlo con gestión, con decisión política. Eso es decisión política.

Vamos a los proyectos. El primero: los delitos vinculados al sistema financiero. Comparto con el miembro proopinante que esto ha dado mucha

tela para cortar en nuestro país. Estos delitos no solamente han generado ruptura del orden legal penal; han generado caídas de gobiernos; han generado rupturas institucionales. Miren si estamos hablando de gravedad en este tema.

Ahora, acá también, a manera de reflexión, con estas reformas, centrándonos exclusivamente en el tema del GAFI y del lavado, yo tampoco creo que vayamos a resolver lo que se busca, que es contemplar todas las desviaciones que desde un sistema financiero pueden afectar a la política general antilavado. Me parece que el problema está en el propio sistema financiero. En tal sentido, entiendo que hay cosas que tenemos que hacer paralelamente, o concomitantemente, que son una asignatura pendiente, como la reforma de la Ley de Entidades Financieras.

Nosotros estamos haciendo aquí reformas a la ley penal, tipificando conductas que están incorporadas a un sistema financiero que tiene una ley obsoleta y que tiene protagonistas que se manejan con esa ley y con idiosincrasias provenientes de esa ley que arrastramos desde hace mucho tiempo: la especulación, el sistema financiero puesto al servicio de algunas de estas cosas que estamos tipificando acá.

Se mezclan en este caso en la propuesta conductas requeridas por el GAFI, como la compraventa de valores en base a información confidencial, la manipulación del mercado, con la introducción de una serie de delitos que no han sido expresamente requeridos por el GAFI, como la intermediación financiera ilícita, la captación del ahorro público o el cohecho financiero. Acá, hay que hacer algunas distinciones. Todas estas figuras describen prácticas prohibidas en gran parte del mundo, pero sólo constituyen delitos en muy pocos países. En el nuestro, todas ellas constituyen actos sujetos a sanciones administrativas por parte de distintos organismos, como la Comisión Nacional de Valores.

Ahora —acá hay una distinción—, pretender convertir ilícitos administrativos en delitos penales con el argumento de que así se intensifica la protección de la transparencia del mercado y se evitan perjuicios para el público, a nuestro juicio, no es el camino correcto. Además, pueden transformarse —y éste es el peligro— en instrumentos ajenos a la persecución penal y más cercanos a otro tipo de persecuciones. Por

eso, en nuestro dictamen en minoría, sólo hemos contemplado aquellas conductas expresamente exigidas por el GAFI. Lo hacemos respecto del *insider trading*, una figura conocida en el mundo de la intermediación de valores, no así respecto de la manipulación o abuso del mercado, donde entendemos que hay una superposición con el artículo 300 del Código Penal que, si bien se menciona en el propio proyecto del Poder Ejecutivo, y se discutió en las comisiones —no tanto en el recinto—, en la Cámara de Diputados el argumento no se sostiene porque la incorporación de un artículo autónomo no apunta a eliminar una laguna de impunidad. Ya está legislado. En síntesis, el tema para nosotros está legislado en el artículo 300.

Tampoco aceptamos lo de la intermediación financiera ilícita, cuya prohibición se encuentra en el artículo 38 de nuestra Ley de Entidades Financieras, y las sanciones, en el artículo 41, siendo éste el caso más claro de la tendencia de convertir ilícitos administrativos en delitos penales.

Respecto de la falsificación financiera, entendemos que está comprendida, también, en el artículo 300, inciso 3, del Código Penal. Y, por último, con respecto al cohecho financiero, la figura describe actividades hoy lícitas. Al no hablarse, en esta reforma, de funcionarios públicos como sujetos, ni de información privilegiada como objeto, ni hacer ninguna referencia a la violación de obligaciones legales o contractuales, estamos desconociendo el motivo de su incorporación. Esto, en cuanto a lavado.

En el tema de terrorismo comparto lo que se ha dicho en cuanto a que la prevención y eliminación del terrorismo son hoy motivo de compromiso y de desafío global. Ningún país civilizado está al margen. Pero, paralelamente, y acá viene el nudo del debate, a raíz de las dificultades para definir los límites y los tipos en cada país, el desafío, a nivel global, se profundiza al incorporar, paralelamente, la protección y promoción de derechos humanos. Éste es el tema. Cada vez que se discuten, acá y en cualquier lugar, el alcance, los límites, la tipificación del terrorismo, aparece como contracara la discusión de los derechos humanos. Esto es lo que ha pasado acá, lo que ha ocurrido en este debate, desde la Cámara de Diputados. Todos habrán recibido las notas de un conjunto de

organizaciones sociales planteando su parecer diferente, su disconformidad respecto de esta cuestión. ¿Por qué? Porque está ahí subyacente. Cómo será la dificultad –lo pongo en estos términos, porque es muy difícil de resolver– que el Estatuto Penal de Roma, que creó la Corte Internacional, no pudo resolverlo, no pudo incorporar el terrorismo como delito *per se* porque los países miembros no pudieron ponerse de acuerdo en la tipificación de la figura. Por lo tanto, el terrorismo no está incorporado en el estatuto como delito *per se*.

Cómo será que a raíz de estas cosas el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debió identificar elementos esenciales de la figura para la tipificación de los actos terroristas, para evitar que en muchos países la lucha contra el terrorismo sirva como excusa para extender innecesariamente el alcance del derecho penal.

De hecho, la ley 26.268, que sancionamos hace poco aquí, ha merecido algunos reproches por parte del GAFI. Y de eso se trata, de alguna manera, lo que estamos discutiendo.

Sr. Pichetto. – La complementariedad de esta norma que estamos discutiendo.

Sr. Sanz. – Exactamente, la complementariedad de esta norma. Por eso es que estamos acá hoy discutiendo esto.

El último informe del GAFI sostuvo que tanto el delito de financiamiento del delito del terrorismo previsto en el artículo 213 quáter del Código Penal como el de organización terrorista previsto en el 213 ter son limitados al no abarcar casos de terrorismo individual o de organizaciones que no cumplan con los requisitos mencionados. Por ejemplo, porque operan sólo dentro del territorio argentino o no disponen de armas de guerra, ni alguno de los supuestos mencionados en las convenciones internacionales. Por ejemplo, una persona que se apodera de una aeronave para nuestra legislación comete un delito pero no un acto terrorista, y quien lo financia es punible sólo como partícipe. Ahí hay una recomendación.

Por estas razones, el GAFI recomienda al Estado argentino ampliar ambos tipos penales y adecuarlos a esta exigencia, introducir la responsabilidad penal de la persona jurídica por el delito de financiación del terrorismo, implementar un sistema efectivo de responsabilidad

administrativa y civil e investigar más proactivamente los posibles casos de financiación del terrorismo. Acuérdense de que al comienzo de la alocución había hecho mucho hincapié en la gestión, porque aquí el GAFI dice: “Investigar más proactivamente los posibles casos de financiación del terrorismo”. Esto no es un problema de legislación, sino de gestión judicial. Esto está dirigido al corazón del Poder Judicial y creo que es bueno reflejarlo porque, si no, pareciera que el Congreso siempre absorbe el impacto de estas cuestiones

Sr. Pichetto. – ¿Me permite una interrupción?

Sr. Sanz. – Cómo no.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Me parece muy interesante este debate pero lo que hay que decir es que la estructuración del GAFI está concebida desde los países centrales, que además han tenido en la última década, desde la voladura de las torres, indudablemente el flagelo del terrorismo internacional, del terrorismo islámico y también de las actividades provenientes del narcotráfico, verdaderas organizaciones de lavado de dinero. Indudablemente, esos países son los que dirigen la normativa y lo hacen pensando en procesos que la Argentina no ha vivido. La Argentina ha sido agobiada en la década del 70 por lo que fue el terrorismo de Estado, e indudablemente que aquí hay una mayor sensibilidad.

Esta norma tiene la consecuencia de pertenecer; si la Argentina no estuviera en el G20 y no estuviéramos incorporados al GAFI no tendríamos que estar votando este tipo de normas. Me parece que el esfuerzo del legislador argentino está puesto en la cláusula limitativa de que las acciones de reclamo social nunca pueden ser consideradas como actividades de carácter terrorista. Me parece que ése es el límite que el legislador le puso con mucho esfuerzo y en una norma, por qué no decirlo, abierta y ambigua que remite al Código Penal. Esto es lo que podemos hacer para tratar de que el GAFI acepte, para tratar de que comprenda cuáles son también nuestros límites en el ejercicio de la soberanía. Indudablemente, más allá de esta norma me parece que también es difícil avanzar.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Continúa en el uso de la palabra el señor senador Sanz.

Sr. Sanz. – Señora presidenta: el senador Pichetto se adelantó al punto final, pero ésta es la disidencia que tenemos.

Creo que, precisamente, la respuesta que nosotros estamos dando, más allá del sentido de pertenencia y de la obligación de la pertenencia, es la peor respuesta. Es la peor respuesta por dos razones. Primero, el haber utilizado como herramienta la duplicación de las penas, de todas las penas y delitos del Código Penal, constituye el principal problema. Es como si se hubiera sobreactuado esa respuesta frente al GAFI, más allá de nuestra pertenencia y de que los países centrales tienen otra cuestión.

Como respuesta a esto, decir que el agravante en todos los artículos del Código Penal cada vez que haya una conducta terrorista es el doble de la pena, francamente, es lo que a nosotros nos deja en una postura contraria. Está claro que esto destruye la sistemática sancionatoria del Código Penal. No quisiera entrar en un tema aburrido para el conjunto de los señores senadores, pero hay que leer lo que dice Zaffaroni en el fallo “Estévez” sobre este tema de la duplicación de penas. A veces, hasta utiliza la ironía al decir que se llega a penas de hasta cien años por la cuestión de la duplicación.

No quiero entrar en el extremo del debate en el que han incurrido algunas organizaciones que pretenden encontrar en esto un objetivo del gobierno en criminalizar la protesta social. No voy a entrar en eso. Quiero que tengan en claro que no me voy a prender en eso porque le reconozco al gobierno que en todos estos años, cuando pudo criminalizar la protesta social, en la práctica no lo hizo. La verdad es que es un mérito y yo no lo voy a deslucir.

Pero no se trata de juzgar la conducta o la intención de este gobierno. De lo que se trata es de ponernos de acuerdo en que se va a dejar escrita en el Código Penal una herramienta que el que venga, cualquiera sea, la puede utilizar con otros fines. Y es cierto, y acá radica la diferencia, que como se encuentra escrita abre la puerta a criminalizar la protesta social. Por eso, despojándonos de toda subjetividad, acusaciones, prevenciones y demás, lo que se tiene que hacer es escribir bien las cosas. Hay que

sancionar una norma sobre la que nadie tenga ninguna duda.

El problema es aún mayor porque la criminalización de la protesta social está siendo objeto de interpretación judicial. ¿Y saben dónde está el problema? En que los jueces no se ponen de acuerdo. Si uno dijera que la Justicia argentina –lo digo por lo que se hablaba hace un rato de que no se va al fondo de la cosa y se desvía en discusiones académicas– tuviera hoy una clara definición de cuál es el límite de la criminalización de la protesta social uno podría votar tranquilo. Pero tampoco hay consenso entre los jueces. Entonces, se incorpora una laguna de discrecionalidad que, a nuestro juicio, debería ser salvada.

Es por esta razón que se ha presentado un dictamen en minoría por el cual se recorren otros caminos para cumplir con las exigencias del GAFI. Proponemos ampliar únicamente la extensión del tipo penal de financiamiento al terrorismo y brindar una definición de acto terrorista sin incrementar las penas. Creemos que ésta es la salida que nos puede dar el doble estándar: cumplimiento con el GAFI, como corresponde, sin sobreactuación, y no abrir una laguna en el derecho interno.

Sintéticamente, éstas son las razones por las cuales estamos de acuerdo en la iniciativa de modificación de la Ley Penal Tributaria y emitimos un dictamen en minoría para los temas de lavado y terrorismo.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra la señora senadora Escudero.

Sra. Escudero. – Señor presidente: nuestro bloque va a apoyar la modificación de la Ley Penal Tributaria, va a apoyar la incorporación de delitos contra el orden económico-financiero y, finalmente, votará negativamente la tipificación o los agravantes por intenciones terroristas.

Deseo expresar algunas pocas palabras con relación a la Ley Penal Tributaria, que si bien se presenta como un traje a rayas para los evasores, en realidad tiene aspectos que morigeran y otros que endurecen las penas.

En lo que morigera, en realidad, es en cuanto a las penas de evasión simple y agravada. Las penas no se modifican, pero al elevarse el monto de la evasión, en realidad, por aplicación de la ley penal más benigna, el efecto inmediato será

la liberación de todos aquellos que están imputados por haber cometido evasiones inferiores al monto nuevo, que será de 400.000 pesos para la evasión simple y de 4.000.000 de pesos para la evasión agravada.

Nosotros estamos de acuerdo en que existe una inflación que justifica la elevación de los montos, y también en que cuando se utilizan facturas apócrifas para evadir al fisco –no importa el monto de esa evasión– debe considerarse la evasión agravada.

Por otra parte, cabe señalar que hay cambios en cuanto al desistimiento voluntario: antes era previo a la elevación del juicio; y ahora debe ser antes de la inspección. De todos modos, creo que habrá algunos problemas de interpretación, que tendrán que resolver los jueces. Me parece que lo más interesante es, justamente, la incorporación como delito de la evasión tributaria en los casos de impuestos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En cuanto a los delitos contra el orden económico y financiero, también estamos de acuerdo. En este sentido, se incorporan como delitos conductas que ya estaban previstas en el decreto 677 de 2001 –Régimen de Transparencia en la Oferta Pública de Valores–: eran infracciones administrativas, ahora van a ser delitos. Y también hay otras conductas que eran infracciones en la ley de entidades financieras, que ahora van a ser delitos. A su vez, se modifica la redacción del famoso artículo 300 del Código Penal.

Por otro lado, coincidimos con la sanción de las personas jurídicas. Nosotros ya lo habíamos hecho en el tema reciente de la ley de lavado de dinero, y decimos que es importante porque se trata de conductas denominadas delitos de cuello blanco, cometidas por individuos socialmente encumbrados, de quienes debería esperarse un máximo apego a las normas que estructuran la convivencia pacífica de la sociedad donde prosperan. Es justo, entonces, que estas conductas antijurídicas que se esconden, muchas veces, al amparo de la complejidad del mundo de transacciones financieras, tengan realmente sanción penal.

Lo que me preocupa es que esto pueda llegar a utilizarse para hostigar a opositores en estas guerras que crea el oficialismo contra ciertos sectores. En ese sentido, me llamó la atención que la presidenta, en su discurso de asunción

del mando, se acordara de la ley de subversión económica. También leí las declaraciones del titular de la UIF, quien dijo que la ley antiterrorista permitiría caracterizar una corrida de la moneda con ánimo de desestabilizar al gobierno y voltearlo como un acto de terrorismo y de financiamiento de esta actividad como financiamiento del terrorismo, me doy cuenta de que a través de la combinación de estas dos normas se está reeditando una forma más sofisticada de la ley de subversión económica. El proyecto, entonces...

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Señora senadora Escudero: el señor senador Pichetto le solicita una interrupción, ¿se la concede?

Sra. Escudero. – Sí, señora presidenta.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Señora presidenta: me parece que no sería justo consentir que la presidenta de la Nación está buscando una estructuración normativa para perseguir. Ella recordó la ley 20.840, en función de situaciones que se vivieron desde la impunidad con algunos responsables de bancos en la Argentina; indudablemente esto fue lo que quiso decir. Me parece haber interpretado esto, y que no corresponde elucubrar lo señalado sobre la ausencia de la ley 20.840, que además era una norma de la dictadura que tenía dos partes, complementaba la subversión económica y la subversión política. Así que me parece que la presidenta no se refirió a esta cuestión pensando en la naturaleza de esa ley como para proyectar una nueva norma. Creo que la recordó en función de la impunidad que dejaron. Algo que hoy el senador Artaza mencionó también y que hace a la responsabilidad de los bancos en las acciones del corralito.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Continúa en el uso de la palabra la señora senadora Escudero.

Sra. Escudero. – Sin perjuicio de las desprolijidades que tienen los proyectos –porque incorporamos como artículo 306 en cada proyecto textos diferentes, y espero que después haya alguna vía para la reenumeración de los artículos–, nosotros vamos a apoyar esos dos proyectos. El que no vamos a apoyar es, obviamente, el que incorpora el agravante de terrorismo.

Creo que el señor senador Sanz me ha ahorrado bastante en el sentido de reconocer que a nivel internacional si hay algo en lo que es muy difícil ponerse de acuerdo es en qué es terrorista, porque los que son terroristas para algunos son luchadores por la libertad para otros. Porque, obviamente, el terrorismo tiene un componente político que no tienen el crimen organizado o el crimen común.

Los acuerdos internacionales sí han coincidido en algunos medios comisivos, como la represión de atentados terroristas con bombas o la represión de actos de terrorismo nuclear, pero una definición comprensiva del terrorismo todavía está en discusión, aunque se ha avanzado bastante en algunos conceptos que hubiera sido bueno recoger para adaptar esto a las recomendaciones del GAFI.

El GAFI no nos está diciendo que nuestra ley sea mala, lo que está diciendo es que también hay casos de terrorismo individual, no solamente de organizaciones, y que hay que activar las investigaciones, pero de ninguna manera está pidiendo esto. Esto es absolutamente vago y abierto, y no es lo que está pidiendo el Grupo de Acción Financiera Internacional.

Tipificar al terrorismo como cualquier acto destinado a generar terror es una definición absolutamente tautológica, no le dice nada al juez y no hay cómo orientar esa interpretación, de modo tal que va a hacer cualquier cosa, lo que el juez considere en el caso concreto.

El profesor Ben Saul de la Universidad de Sydney, que es un experto en temas de terrorismo, dice: “pocas palabras están plagadas de tanta indeterminación, subjetividad y desacuerdo político como terrorismo. Es peculiar su poder semántico y su capacidad para denigrar y deshumanizar a aquellos a quienes es dirigida, incluyendo legítimos opositores políticos”. Por eso recomienda que cualquier definición no sea demasiado abierta.

Si nosotros definimos terrorismo como la finalidad de aterrorizar, ¿hay algo más abierto que eso? Creo que es un error no crear un tipo autónomo de terrorismo. Creo que es un error derogar los artículos que nosotros habíamos incorporado tipificando muy bien lo que era una organización terrorista. Pero esto de decir que cualquier delito de toda la batería de delitos del Código Penal, cuando se comete con una

finalidad terrorista o de aterrorizar a la población —que no dice nada—, va a ser considerado terrorismo y agravado de este modo, nos parece que afecta el principio de legalidad, que deja todo a la voluntad del juez.

El maestro Beccaria advirtió que cuando se deja a la interpretación del juez la ley quedará dependiendo de una buena o mala digestión del juez, de la violencia de sus pasiones, de la debilidad del que sufre, de las relaciones del juez con el ofendido, pero entre las causas que podían incidir en la interpretación de una ley oscura Beccaria no contó la relación del juez con el Poder Ejecutivo.

Decimos entonces que no sólo el principio de legalidad exige una definición más rigurosa sino que también la propia historia argentina nos demanda esa rigurosidad en un tema tan sensible todavía. Y es que las consecuencias de ser calificado como terrorista, de haber cometido un acto terrorista, tienen impacto en otros aspectos; por ejemplo, en el derecho de los refugiados. No se puede dar la condición de refugiado a una persona que está acusada de haber cometido un delito con finalidad terrorista. Estamos destruyendo la posibilidad del refugio. En el contexto de conflictividad política y social, es muy perturbador tener una norma de esta naturaleza, tan abierta, en el Código Penal.

A mí también me preocupa la banalización del terrorismo, o sea que cualquier cosa sea terrorista. Por ejemplo, un violador o un asesino serial, como aterroriza a la población, ¿entonces es terrorista y le duplico la pena? ¿Es eso lo que nos pide el GAFI? Ya lo dijo el señor Sbattella: si las corridas bancarias son hechas para aterrorizar a la población son terroristas. Las consultoras que miden la inflación y aterrorizan a la población, ¿son terroristas? ¿La tapa de un diario será terrorista?

Creo que esto no tiene ninguna posibilidad de pasar un test de constitucionalidad en nuestro país. Las excepciones que se intentaron tampoco son suficientes. Se dice que no se aplicará cuando el o los hechos de que se traten tuvieran lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos o sociales o de cualquier otro derecho constitucional. ¿Cómo es posible que el ejercicio de un derecho constitucional pueda ser al mismo tiempo un delito?

Cuanto más abierta es la definición, más claras y mayores excepciones hay que establecer. Nosotros tendríamos que haber fijado claramente como excepciones a aquellas que están dentro del derecho internacional humanitario, dentro del derecho internacional de refugiados, a la resistencia violenta legítima, a la opresión política y a todos los actos de protesta, manifestaciones, disenso o acción gremial cuando no tuvieran la intención de causar muerte, daños graves, riesgo a la salud o a la seguridad pública. Así debería haber sido el texto de las excepciones.

Creo que, con este tema, el gobierno está abriendo una caja de Pandora. No sabemos a qué puede conducir, porque convengamos en que no es el Poder Ejecutivo el que aplica esta norma sino que son los jueces de la Nación frente a cualquier hecho o delito que considere que causa terror a la población. No es el Poder Ejecutivo a quien se destina esta norma y, obviamente, tampoco es lo que pide el GAFI.

Tampoco estoy de acuerdo desde el punto de vista sistemático con la incorporación de la financiación del terrorismo en el capítulo de delitos contra el orden económico y financiero. El terrorismo es un delito contra el orden público, de modo que su financiamiento no es un atentado contra el orden económico; las corridas bancarias sí lo son. Pero reitero que el terrorismo es un atentado contra el orden público.

Hay otro tema que nos preocupa especialmente; me refiero al último párrafo del artículo 6°. Ese párrafo dice lo siguiente: “La Unidad de Información Financiera podrá disponer, mediante resolución fundada, con comunicación inmediata al juez competente, el congelamiento administrativo de activos vinculados a acciones delictivas”.

Es decir que un funcionario que depende del Poder Ejecutivo nacional podrá disponer el congelamiento de fondos y comunicar al juez. O sea que no debe pedir autorización del juez, sino que, directamente, podrá congelar los fondos. ¿Y qué será congelar fondos? ¿Será un embargo, un decomiso? ¿Qué es lo que será congelar? Porque, obviamente, esto es la traducción al español de *freezing*.

Aquí, yo quiero recordar la posición fijada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2010, en la causa “Administración Federal de Ingresos Públicos c/ Intercorp”. Nuestro alto

tribunal, en un caso similar de facultades de la AFIP, dijo que es una inadmisibles delegación en cabeza del fisco nacional –en este caso, sería la UIF– de atribuciones que hacen a la esencia de la función judicial.

En efecto, el esquema diseñado en el precepto, al permitir que el agente fiscal pueda, por sí y sin necesidad de esperar siquiera la conformidad del juez, disponer embargos, inhibiciones o cualquier otra medida sobre bienes y cuentas del deudor, ha introducido una sustancial modificación del rol del magistrado en el proceso, quien pasa a ser un mero espectador que simplemente es informado de las medidas que una de las partes adopta sobre el patrimonio de la contraria. Esta participación, menor e irrelevante, que se reserva a los jueces en los procesos de ejecución no solo violenta el principio constitucional de división de poderes sino que, además, desconoce los más elementales fundamentos del principio de tutela judicial efectiva de defensa en juicio, consagrado por el artículo 18 de la Constitución Nacional y por los pactos internacionales incorporados a la Constitución con jerarquía de esa norma.

Conferir entonces a la administración esa potestad sin autorización judicial, no resiste el test de constitucionalidad. Por lo tanto, creo que habría que definirlo como delito autónomo e incorporar algunos medios comisivos, tal como hicimos en el artículo 211.

En el mundo, respecto de ningún delito se ha abusado tanto de la tipificación como en el caso del terrorismo. No olvidemos que, amparándose en la lucha contra el terrorismo, Hitler promovió la ley habilitante, que prohibía la representación comunista en el Bundestag alemán y le permitió mayorías absolutas. El desenlace es conocido.

Asimismo, Israel considera a los palestinos terroristas. Ariel Sharon decía que Arafat era su Bin Laden. Y los republicanos norteamericanos –y este proyecto parece que sigue un poco las ideas de los republicanos estadounidenses– ahora dicen que los narcotraficantes mexicanos son terroristas y, en consecuencia, hay que utilizar tácticas de contrainsurgencia para combatirlos, porque los estados tienen derecho a defenderse del terrorismo. Por ende, ya vendrá la intervención en otros estados, con el pretexto de combatir esta insurgencia terrorista.

Podríamos haber definido un tipo penal según el cual el terrorismo importe un acto violento y grave perpetrado con la intención de causar la muerte o lesiones graves a las personas o poner en peligro la vida, incluyendo graves actos contra la propiedad, cometido fuera del contexto de un conflicto armado, motivado en propósitos políticos, ideológicos, religiosos o étnicos, enderezado a crear un miedo extremo en una persona o grupo de personas o en una población, en general, o a obligar a un gobierno o a una organización internacional a hacer algo o abstenerse de hacer algo. Hubiera sido un tipo penal no librado a la fantasía o imaginación del juez de turno. Me parece que ésta va a ser una herramienta para persecuciones judiciales de opositores de cualquier gobierno de turno. Por eso, vamos a votar negativamente.

Sr. Pichetto. – ¿Me permite una interrupción?

Sra. Escudero. – ¡Cómo no, señor senador!

Sr. Pichetto. – En realidad, la senadora describió un tipo penal de terrorismo, sobre el que la doctrina internacional no se ha puesto de acuerdo. Si fuera fácil llevar a cabo esa tarea, la hubiéramos definido, pero no hay acuerdo internacional.

En los fueros internacionales, cuando se discute la calificación del delito de terrorismo, aún no se ponen de acuerdo. Acá hay una remisión; indudablemente, es lo que se puede hacer. Y además, siempre que hay terrorismo, hay actos lesivos hacia el Estado, al orden constituido, no a las personas. Si se menciona el delito de violación, estamos hablando de otra cosa.

Sra. Escudero. – Por eso, el texto que se propone es tan abierto que cualquier crimen de la amplísima batería del Código Penal, si aterroza a la población, es terrorismo. O sea, es peor que cualquier aproximación a una definición, como lo hicimos con las organizaciones terroristas, que es ley y ahora la estamos derogando. Esa es la posición del interbloqueo.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador Juez.

Sr. Juez. – Señora presidenta: este es el caso en donde uno quiere acompañar y no puede.

¿El Estado necesita una ley antiterrorista? Claro que sí; ¡cómo no! ¿La Argentina ha sufrido atentados terroristas? Cada vez que todos

los que estamos acá concurrimos a un acto de la comunidad judía, no tenemos explicación por los temas de la AMIA y de la Embajada de Israel; nos da vergüenza. Cada vez que el primer mandatario, hoy Cristina, antes Néstor y mañana no sé quién, sale de los límites de la República Argentina, los organismos internacionales le piden respuesta y no la tenemos. Conclusión: ¿se puede estar en contra de una ley antiterrorista? ¿La Argentina la necesita? Claro que la necesita.

Recién, el senador Pichetto decía: “es lo que se puede hacer”. No, mentira, lo digo con todo respeto. Se puede hacer bien y esto no está bien hecho. Cuando alguien se expresa con mayor claridad o precisión que la que puedo tener yo, trato de ser breve. No tendría cómo empardarle a Sanz ni a la senadora Escudero lo que acaban de plantear, porque lo han dicho con mucha claridad. Y no para que nos ofendamos. Tiene que ver con esa celeridad de querer sacar cosas a la atropellada.

¿Se puede hacer mejor? Claro que se puede tipificar como corresponde, porque lo que han planteado el senador Sanz y la senadora Escudero no es una locura. El senador Sanz, con mucha claridad, dijo que esto se resuelve con gestión. Todos venimos de provincias donde sabemos que las gestiones judiciales son espantosas, por falta de presupuesto, por falta de capacidad, por politización del Poder Judicial. Sabemos que falta gestión. Hay muchos delitos que tienen que ver con el narcotráfico que se podrían combatir; por lo menos, en Córdoba, la cuna del derecho penal. Hace veintisiete años que me gano la vida como especialista en derecho penal. Muchos de los delitos que tienen que ver con el narcotráfico en mi provincia se podrían resolver si la Justicia tuviera voluntad de profundizar; no quedarse con el menudeo, con la tenencia simple, es decir, profundizando en las bandas de narcotraficantes. Pero siempre la cosa termina ahí, porque hay una connivencia entre poder político y la policía.

El senador Sanz tiene razón cuando plantea esta cuestión, que estos temas se resuelven con gestión y con gestión judicial, no con tipos delictivos. Y este tipo, como dice la senadora Escudero, amplio, vago, terriblemente ambiguo es un búmeran. Mis muchos amigos kirchneristas me dicen: “Pero loco, contame un hecho

de protesta social reprimido por el gobierno”. Tengo que reconocer públicamente, como hizo el senador Sanz, que este gobierno no ha reprimido, pudiendo haberlo hecho en más de una protesta social. Pero una ley no se hace para un gobierno. Tenemos que curarnos en salud.

La senadora Morandini va a continuar con el tema. Pero quiero agregar que, si bien el Frente Amplio Progresista tiene voluntad de acompañar el proyecto, tal como está planteado este tipo delictivo en su artículo 41 quinqués, es imposible de hacer.

Y quiero suscribir otro párrafo del senador Sanz. Pasamos de la inactividad absoluta a una sobreactuación escandalosa. Pasamos de no hacer nada a querer demostrar al GAFI que los argentinos somos tan picantes que sí vamos a tipificar el terrorismo; algo que no pudieron organismos internacionales de derecho, organizaciones importantes, ni países que sufren el terrorismo cada veinticuatro horas.

Sin embargo, nosotros sí le hemos encontrado la fórmula y lo hemos descrito en un tipo vaguísimo, increíblemente vago, que ahora lo ponemos en manos de otros vagos, que van a ser quienes van a tener que interpretarlo. Es una espada de Damocles; y la verdad es que no quiero ser responsable el día de mañana si algún argentino es perseguido con semejante tipo delictivo.

Entonces, queremos acompañar, pero si tuviéramos predisposición y voluntad, estaríamos devolviendo este despacho a la comisión y nos adentraríamos a trabajar decididamente, para que fuera el primer tema a sacar el año que viene, para no cometer una torpeza. Porque tampoco le va a servir a la presidenta ir con esta figura delictiva ante los organismos internacionales. No le va a servir al titular de la UIF, que está presente, decir que nosotros hemos avanzado sobre lo que no ha hecho ningún país del mundo. Esto no le sirve a nadie, no le sirve al gobierno y, mucho menos, a la gente. Organizaciones sociales muy vinculadas a este gobierno plantean esta cuestión, y nosotros no podemos mirar para el costado.

Con este criterio, quiero suscribir lo que ha dicho el senador Sanz, que la verdad lo ha hecho de manera impecable, y el preciosismo jurídico con el que siempre lo hace la senadora Escudero. Por lo tanto, no tengo más que agre-

gar. Simplemente, me resta advertir que, en los términos en que está planteado el tema, y no quiero ofender a nadie, no me interesa, es un mamarracho jurídico; y estas cosas terminan mal, porque se ponen en manos de personas que, después, conforme a la presión política, terminan actuando.

Repito, como decía la senadora Escudero, no alcanza con la salvedad de decir –y es una obviedad–: “a quién se le ocurre que el ejercicio legítimo de un derecho puede ser un acto tipificado como una figura penal”. Ello no alcanza. El día de mañana, seguramente, esto será interpretado por jueces que, conforme a la presión del poder, decidirán sobre una figura verdaderamente peligrosa.

Además, quiero decir esto, porque el senador Fuentes planteó con mucha claridad que, alguna vez, deberíamos ponernos a trabajar en serio en el ordenamiento del Código Penal y no hacer parches como éste. También, decía con claridad el senador Sanz, sobre esta locura del tema de la pena, que termina poniéndole al terrorismo una sanción mucho más alta que al delito de sedición, que es el alzarse en armas contra las autoridades constituidas.

Quiero decirle, señora presidenta, que aun queriendo acompañar, el Bloque Progresista, no tenemos ninguna posibilidad de suscribir este texto tal cual como viene narrado. Es todo lo que tengo que informar.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el senador Fuentes.

Sr. Fuentes. – Ante la intervención de otras colegas, hay algo que no se ha leído bien. Nunca el ejercicio de un derecho constitucional, como la defensa de un derecho humano, puede constituir un delito.

La redacción del proyecto significa otra cosa. Dice que aquellos delitos que pudiesen cometerse en ocasión del derecho de peticionar –era el ejemplo que se dio claramente el otro día–, por ejemplo, cuando en una manifestación se agrede a un agente del orden o se rompe una vidriera, serán sancionados. Quería hacer esa aclaración para luego seguir con el debate, porque si no suena de otra manera esa afirmación.

Coincido con el senador Juez en que si ejercer un derecho es delito, es un absurdo. No es ésa la intención de la norma.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra la senadora Morandini.

Sra. Morandini. – Es un alivio haber escuchado a los que son abogados darme permiso al decir que hay temas de imprecisión o de definición. Entonces, como la política también es una cuestión de fantasmas y de espectros, he tratado de entender por qué tantas organizaciones humanitarias de todas las provincias –y se han mencionado organizaciones de la seriedad del CELS– nos han manifestado su preocupación.

En ese marco, he tratado de entender qué nos pasa que esto nos atemoriza. Por qué nos aterroriza una ley para un Estado democrático. Entonces, tengo que irme a la definición de las palabras. Si primero fue el verbo, vinieron después los equívocos.

Por supuesto, si uno pregunta qué te aterroriza, se va a dar cuenta de qué lado del mundo vive. Seguramente, lo que aterroriza hoy a un europeo es perder su empleo, pero también la palabra “terrorismo” tiene una connotación –como se ha señalado acá– marcada por el 11 de septiembre, después de que estallaron las torres.

Diferente es en la Argentina, donde la palabra “terrorismo” connota con el Estado. El que se hizo terrorista en nuestro país fue el Estado. Y ese es el fantasma que ilumina cada una de las cosas que, como en este caso, no es un tema del lugar en que cada uno está en el recinto sino que nos tiene que encontrar a todos viendo de qué manera, con este pasado de terror que tenemos en las espaldas, hacemos lo que les ha ocurrido a todos los países que han pasado del autoritarismo a la democracia y se preguntan cómo se combate el terrorismo sin atentar contra los derechos humanos.

Y en tren de hablar de palabras, nosotros tenemos la mayor confusión y equívoco que pudo haber provocado una de ellas, que es que se haya pensado que un decreto de aniquilar a la subversión abrió el camino al terrorismo de Estado. Quién puede creer que cuando se dice “aniquilar la subversión” se piense en matar, secuestrar y todo lo que ya sabemos y que siempre está como fantasma y como espectro sobre la cabeza de este Congreso. Sin embargo, eso fue lo que significó en nuestro país.

De modo que no es menor en nuestro país que pidamos precisiones y que tengamos tantas

organizaciones que tengan temor de que se esté dando una ley a un Estado con ese pasado en las espaldas. Porque también, cuando hablamos y revisamos el pasado, decimos que reprimieron sin la ley en la mano. Entonces, cuidado con este Estado que tuvo un pasado terrorista, porque confundió “aniquilar” y, además, no lo hizo con la ley en la mano; no sea cosa que le estemos dando una ley a quien todavía no ha incorporado como valor los derechos humanos como cultura.

Escuché lo que decía el senador Juez. El hecho de que un gobierno no reprima la protesta social no es meritorio, es la obligación que tiene. No es el gobernante bueno que no reprime, es la Constitución que garantiza que los reclamos son legítimos. Otra cosa es que salgamos de esa lógica de pensar que se trata de represión o permisividad. Lo que nos permite salir de la confrontación es que tengamos una cultura de valores, que los derechos humanos no puedan ser interpretados y que quieran decir para todos lo mismo.

Este es un debate que se han dado todas las sociedades que, como nosotros, han venido de un pasado autoritario. Yo viví en España cuando se dio el gran debate de la llamada Ley de la Pata en la Puerta. Y era exactamente es pregunta. ¿Para combatir a la ETA, la policía podía venir, patear la puerta y entrar en una casa?

Estos son dilemas que es necesario que trasciendan este Congreso. Debemos debatir y escuchar a los que saben. Tenemos que prestar atención a la cantidad de organizaciones que con notas han llegado a todos los senadores. En cada una de las provincias que representamos acá, hay organizaciones humanitarias y de derechos humanos que están preocupadas porque se esté dando un instrumento con vaguedad. Entonces, nuestra preocupación tiene que pasar por ser claros para construir, finalmente, una cultura de derechos humanos.

Se mencionaba acá la dependencia de los organismos internacionales. Creo que lo mejor que nos ha pasado con nuestra Constitución es haber dado rango constitucional a todos los tratados internacionales de derechos humanos. Pero la presión del GAFI no puede ser superior, por ejemplo, a la mora que tiene este Congreso para contar con un mecanismo contra la tortura. No lo hemos podido hacer este año. Vivimos en un país que todavía no ha incorporado en las

fuerzas de seguridad que la tortura es incompatible con la democracia.

De modo que esto tiene que encontrarnos a todos debatiendo, para que nos quitemos todas las dudas que puede concitar una ley como esta, que se hace a las apuradas, que es imprecisa y ambigua. Y como tenemos en nuestras espaldas lo que ha sido terrorismo de Estado, debemos sancionar efectivamente leyes democráticas, que garanticen los derechos humanos, porque de eso se trata.

Dicen que el terrorismo pone en riesgo la democracia y los derechos humanos. Pero no todo lo que nos dicen tenemos que aceptarlo. Es decir, nosotros tenemos prioridades en función, precisamente, de esto que estoy describiendo, de este pasado de un Estado que se hizo terrorista.

Para no abundar en lo que se ha presentado antes desde el punto de vista estrictamente jurídico, me parece importante, entonces, hacer un aporte de tipo cultural que, finalmente, es lo que sostiene las leyes. En definitiva, como se decía antes, son los jueces quienes luego tienen que aplicar las normas; sobre todo, en provincias como la mía, en donde todavía tenemos, por ejemplo, códigos de faltas, donde se llenan las comisarías solo por portar cara, solo por el merodeo o solo por la sospecha.

Respecto de otras leyes, hoy, aquí, se habló también de restituir confianza. Pero no se trata de restituir confianza solo con relación al precio, solo con relación a la economía sino que es hora de que podamos restituir confianza en sí, lo que se logra efectivamente cuando los derechos humanos pasan a invocarse para garantizar vida y no solo por haber denunciado la violación de los derechos humanos.

Ojalá estemos construyendo y que se entienda que estas advertencias que nos están presentando las organizaciones humanitarias van en ese sentido, para que, finalmente, construyamos cultura de derechos humanos que connoten con la vida y no con la muerte.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el senador Cimadevilla.

Sr. Cimadevilla. – Señora presidenta: como introducción, como aquí se ha mencionado, hoy estamos tratando de incorporar al Código Penal delitos que tienen como bien jurídico tutelado el orden económico y financiero.

Se trata de bienes que tienen particularidades, diferentes de otros protegidos frente a distintos ilícitos que están incorporados al Código Penal. Y acá se volvió a hablar –porque yo lo he dicho en otras sesiones– de que no podíamos cada vez que sesionaba el Senado estar reformando un artículo del Código Penal, porque llegamos al punto de que hay algunos tratadistas que dicen que ya no tenemos más Código Penal.

Esto se lo sugerimos al ministro de Justicia en su visita a la comisión y, así, le propusimos que, en vez de andar remendando el código de vez en cuando, nos pusiéramos a trabajar entre legisladores, ministro de Justicia y Corte Suprema, en la elaboración de un nuevo Código Penal que contemple todas estas situaciones y les dé coherencia a todos los delitos que permanentemente estamos incorporando. Quedó el compromiso del ministro de poder avanzar en este tema; y como cuestión preliminar e introductoria, creo que es un tema a tener en cuenta por este cuerpo de aquí en adelante.

Este paquete de leyes que se está tratando hoy nos causa mucha preocupación. Sobre todo, esta iniciativa que penaliza al terrorismo. Poco se puede agregar a lo que ha dicho el senador Sanz. Pero ante los requerimientos del GAFI, en el sentido de que debíamos adaptar nuestra legislación a los requerimientos de organismos internacionales, lo único que se nos está ocurriendo es la creación de un agravante genérico para todos los delitos del Código Penal; otra cosa no estamos haciendo.

Y acá viene la preocupación. Así como el terrorismo afecta a los derechos humanos y al funcionamiento de una sociedad, también, a veces, pueden hacerlo las medidas que se adoptan por el Estado para luchar contra el terrorismo.

Por eso es que debe actuarse con muchísima prudencia y reflexión. Y la vaguedad del tipo penal que se va a aprobar aquí –no nosotros, pero que el Senado, seguramente, va a aprobar–, es peligrosa y muy riesgosa. Si bien es cierto lo que aquí se dijo –lo señaló el senador Pichetto– en cuanto a que ha sido imposible lograr hasta el día de hoy una definición de terrorismo, sí es verdad que los organismos internacionales han identificado elementos esenciales que, como mínimo, deben ser interpretados en la tipificación de actos terroristas. Esto tampoco lo estamos

haciendo con el proyecto de ley que hoy se va a aprobar. Y esto sí se puede hacer.

Esta propuesta del Poder Ejecutivo está lejos de contemplar las observaciones que se le hicieron a la ley 25.268. Esta ley, lamentablemente, tiene muchas similitudes con la ley chilena 18.314, que es una ley de la dictadura de Pinochet, que define los actos terroristas en forma muy semejante a la que propone el proyecto del oficialismo.

Esta ley, señora presidenta, es la que se ha utilizado en Chile para reprimir los actos de los pueblos originarios, por lo que ese país enfrenta la posibilidad de una condena internacional.

Resulta paradójico, entonces, que se nos diga que, con esta ley, estamos adaptándonos a los estándares internacionales, cuando el país que aplica una norma similar está a punto de ser sancionado precisamente por la aplicación de legislación muy parecida.

Además, hay otro problema que nos preocupa. En la Argentina, en los últimos años, la práctica de nuestros tribunales alcanza para advertir que no es suficiente con afirmar que estos agravantes no resultan aplicables a hechos que tuvieran lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos, sociales o constitucionales. ¿Por qué digo esto? Por la gran cantidad de procesos que hay en nuestros tribunales contra personas involucradas en reivindicaciones sociales y laborales.

Voy a leer un párrafo de conclusiones a las que ha llegado el CELS luego de investigaciones. Dice que la criminalización judicial de la protesta social se ha concretado en el inicio de miles de procesos penales, al margen del derecho, con la única finalidad de controlar ilícitamente la acción política en el campo popular. Este despliegue coercitivo, además de la latente posibilidad de una pena, ha sido utilizado por la administración de justicia como una auténtica herramienta de sometimiento sobre los manifestantes. Miles de participantes en protestas legítimas han soportado y soportan la persecución penal como consecuencia de su acción, antes que como reacción a la infracción de la ley penal. Este compromiso judicial, violatorio de derechos, ha sido denunciado por varias organizaciones y ha sido tratado con detalle en varios trabajos de doctrina, en los que precisamente se señala que algunas consideraciones

exigidas para el correcto balance de los derechos en juego no son tratadas por los jueces, al fallar con relación a estos actos de protesta.

A esta realidad judicial que, hoy, tiene la Argentina, nosotros estamos por agregar una legislación que, seguramente, va a agravar mucho más este cuadro.

La CTA, en mayo de 2002, también elevó una queja al Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT, en la que denunció que más de 2.800 personas se encontraban bajo proceso, de acuerdo con la Secretaría de Derechos Humanos de la entidad sindical. En la mayoría de estos casos, eran trabajadores organizados sindicalmente que habían reclamado por algún derecho.

Por eso digo que, frente a este cuadro, nosotros, hoy, estamos tratando de sancionar una ley que tiene una vaguedad tal, que puede llevar a agravar esta situación muchísimo más.

En definitiva, si hoy no podemos siquiera contener la criminalización de la protesta social, no debemos introducir nuevas normas que podrían contribuir a profundizar y tornar más dramático el problema. Pero, además, hay otra cosa que quiero remarcar. ¿Quién nos garantiza que, con esta ley en la mano, en el futuro, algún gobierno no pretenda definir ideologías, finalidades, intenciones supuestamente terroristas? ¿Quién va a decidir que tal o cual acción es terrorista?

Al inicio de esta sesión, hoy a la mañana, el senador Aníbal Fernández, cuando se preguntó por qué se impedía llegar a trabajadores rurales a presenciar esta sesión, o a manifestarse frente al Congreso, no dudó en tildar de acto mafioso una manifestación obrera.

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Cimadevilla. — Sea como fuere, si hubiera habido un acto mafioso...

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). — Por favor, no dialoguen.

Sr. Cimadevilla. — Si hubiera habido un acto mafioso, eso no obliga a paralizar una protesta. Esto es lo mismo que cuando, por culpa de un barra-brava, no se deja entrar a nadie a la cancha.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). — Por favor, señores senadores.

Sr. Cimadevilla. – Estoy en uso de la palabra, señora presidenta.

Sr. Fernández. – Pido una cuestión de privilegio.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador Fernández.

Sr. Fernández. – Señora senadora: estando en mi despacho un señor se arrogó el derecho de decir que los senadores tenemos que saber que ellos conocen quiénes somos, que saben dónde vivimos y que nos van a ir a buscar a nuestras casas. Eso denuncié yo.

Sr. Cimadevilla. – Eso es una causa por...

Sr. Fernández. – Eso es un hecho mafioso.

Sr. Cimadevilla. – Entonces denuncie el hecho mafioso, pero no impida...

Sr. Fernández. – ¡Y qué es lo que hice!

Sr. Cimadevilla. – Que no lo impidan, como me lo impidieron a mí.

Sr. Fernández. – ¿Y quién lo impidió?

Sr. Cimadevilla. – Lo denunció el senador Cano.

Sr. Fernández. – Entonces agárresela con Cano; qué se mete conmigo.

Mi amigo, yo no tengo nada que ver.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Por favor, no dialoguen.

Sr. Cimadevilla. – Con mucha ligereza se descalifica a...

Sr. Fernández. – No descalifico, califico de hecho mafioso. No me van a hacer votar lo que quiera un señor con un micrófono porque me agravia; voto lo que quiero.

Sr. Cimadevilla. – A mí tampoco. Yo también voto lo que quiero.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Por favor, no dialoguen.

Sr. Cimadevilla. – Y tal como lo dijo el senador Fuentes, los agravantes previstos en estos artículos no se aplicarán cuando los hechos de que se trate se produjeran en ocasión del ejercicio de derechos humanos.

No es éste el problema, estamos de acuerdo. Si durante una manifestación alguien comete un delito, deberá ser sancionado por ese delito. Pero esto no impide, con la vaguedad que tiene este artículo, que esa misma manifestación a la que usted se refiere, sea tratada como un acto

terrorista. Por la vaguedad que tiene el tipo penal esto puede ocurrir. De todos modos, señor presidente...

Sr. Pichetto. – Son diez minutos por reloj. Más que nunca, son diez minutos por reloj.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Se le terminó el tiempo, senador.

Sr. Cimadevilla. – Se me terminó el tiempo; de todas maneras este debate ha sido esclarecedor en cuanto a las intenciones de una y otra bancada.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador González.

Sr. González. – Señora presidenta: como integrante de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales he acompañado este proyecto con la convicción absoluta de que esta iniciativa del Poder Ejecutivo de ninguna forma busca criminalizar la protesta social. Pido disculpas si se ha mencionado hoy, pero no lo he escuchado: criminalizar la protesta social es lo que ha pasado hace diez años, de lo que se acaba de cumplir un nuevo aniversario. Me parece que corresponde en este recinto decir que debemos solidarizarnos una vez más con los padres, las madres, los hermanos, los nietos de las víctimas. Hubo 39 muertos, nueve de ellos menores de 18 años, que han fallecido como consecuencia de la criminalización del conflicto social que existió lamentablemente en 2001. No sé si se ha dicho, pero aprovecho la oportunidad para decir lo que corresponde una vez más –y gritar mil veces–, que de eso se trata criminalizar la protesta social. Evidentemente, no es el espíritu de esta norma, por más esfuerzo que se haga en interpretar algo diferente a lo que dice el artículo 41 quinquies, que claramente dice que no es de aplicación a los conflictos sociales. Éste es un gobierno que se ha caracterizado –y lo ha dicho correctamente el senador por Córdoba– por no criminalizar la protesta social. El senador Sanz también lo dijo. Corresponde reconocer eso y señalar que, a partir de la historia de este gobierno, no se puede pretender pensar que va a tratar de trasladar a la República Argentina un proyecto de ley igual al sancionado por Pinochet; me parece que eso no tiene ningún asidero. Se dice con total intencionalidad. Éste es un gobierno que se ha caracterizado por respetar a rajatabla los derechos humanos.

En otra intervención de un representante de una provincia hermana del Norte, subliminalmente, se permitió criticar la figura del ex presidente Néstor Kirchner al decir que no conocía que en nuestra provincia se hayan respetado los derechos humanos. No puedo opinar en profundidad de la política de derechos humanos de Formosa. Pero aquel que no conoce en profundidad una política de una determinada provincia no corresponde que dé opiniones disvaliosas de la historia de un hombre que les devolvió la dignidad a los trabajadores, que puso en valor la política como una herramienta de cambio y que gobernaba los destinos de mi provincia. No recuerdo haber visto a esos senadores de esa provincia, aunque sí me acuerdo de algunos otros, aquí presentes, al discutirse hace un par de años la resolución 125. Realmente, no los recuerdo investigando la política de derechos humanos en una provincia que no criminaliza la protesta social.

El día que fueron algunos senadores de la oposición a hacer una convención no tuvieron absolutamente ningún problema ni ninguna manifestación ni a favor ni en contra. Simplemente, había un pasacalles que decía: “Vienen en avión y se van en helicóptero”.

Entonces...

Sr. Sanz. – Miguel, me parece que se está yendo por la banquina el muchacho.

Sr. González. – Yo no soy ningún muchacho, senador. Téngame el mismo respeto que le tengo a usted.

Sr. Sanz. – Él nos está faltando el respeto a nosotros.

Sr. González. – Donde hemos tenido la responsabilidad de estar ante actos graves de políticas sociales, fuimos muchos los que optamos por no criminalizar la protesta social.

En ese sentido, quiero reivindicar la actitud frente a conflictos graves de nuestra provincia que ha tenido el señor senador Martínez, buen senador y mejor persona. En momentos de grave convulsión social en la provincia, siempre se manifestó por abonar la paz social.

Creo que el proyecto en consideración de ninguna forma traslada el proyecto de Pinochet a la Argentina. Me parece que está claro que ninguna regla de interpretación de un juez, ni la sana crítica ni la íntima sincera convicción,

puede llevar a un juez a criminalizar la protesta social. Ni siquiera la interpretación de la voluntad del legislador, que la podrá buscar un juez en la versión taquigráfica, dejará dudas de que no se quiere criminalizar la protesta social.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.

Comienzan a hacer uso de la palabra los presidentes de bloque.

Sr. Giustiniani. – Señora presidenta: me parece que se está ante un tema muy importante.

En primer lugar, quiero dejar sentada la postura del Frente Amplio Progresista ante el Orden del Día N° 922 de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales en el proyecto de ley en revisión por el que se modifican diversos artículos de la Ley Penal Tributaria.

Vamos a acompañar con nuestro voto la modificación planteada en dicha norma.

Pero me voy a abocar a plantear lo que ya expusieron los senadores Juez y Morandini en lo que hace al rechazo de la llamada Ley Antiterrorista que se aborda en esta instancia.

Quiero recordar que hace cuatro años en este recinto, el 6 de junio de 2007, fui el único senador que votó negativamente en aquella noche en que se votó esa mala ley llamada antiterrorista.

Ustedes recordarán que, en soledad, fundamente que estábamos dando en aquella oportunidad un paso muy negativo, porque en esta tensión que existe entre la seguridad y el estado de derecho estábamos avanzando peligrosamente sobre el Estado de derecho. Si en aquella oportunidad consideraba que la norma era muy negativa, creo que hoy esta iniciativa profundiza peligrosamente las negatividades de aquella ley, y abre una gran cantidad de interrogantes.

El primero es por qué un gobierno que se precia, correctamente, y ha sido reconocido en nuestro país –e internacionalmente– de avanzar en el campo de los derechos humanos, hoy sanciona una ley que significa un claro retroceso en la política de esos derechos. No lo decimos desde la oposición; lo dicen las organizaciones amigas del gobierno, que son justamente amigas de éste porque comparten los avances en materia de derechos humanos.

Por ejemplo, la agrupación HIJOS –que se ha pronunciado por estas horas rechazando

firmeramente este proyecto de ley—, las Abuelas de Plaza de Mayo y el CELS.

Obsérvese el contrasentido que significa el rechazo del CELS, al cual sin embargo le vamos a realizar un gran reconocimiento mañana al tratar el ingreso de los pliegos militares, en tanto le requerimos a esa organización por su seriedad, trayectoria y responsabilidad el análisis de cada pliego de los militares que vamos a considerar en el recinto. Pero el CELS se ha pronunciado rechazando con contundencia esta norma, y ha planteado cuál es la razón de su apuro. O sea que no solamente ha cuestionado la necesidad de la norma, sino su oportunidad.

Por eso, quiero formular otra pregunta: ¿qué necesidad hay de que en estas sesiones extraordinarias estemos tratando y sancionando una ley que significa un retroceso claro en materia de derechos humanos?

No ha quedado claro —ni en el debate de la Cámara de Diputados— por qué el tipo penal tan abierto y que tan pertinentemente han desarrollado en sus exposiciones la senadora Escudero y el senador Sanz, deja al arbitrio de los jueces la posibilidad de interpretar qué es acto terrorista, acción terrorista y terrorismo. Porque, a su vez, se multiplica el tipo penal, se duplican la pena mínima y la máxima de manera peligrosísima y se tira por la borda aquello de la prudencia con la que se debe hacer el abordaje en materia penal. Tenemos experiencias negativas en este Congreso con respecto a esto. De hecho, fuimos pocos los que votamos en contra de las leyes de Blumberg —muy pocos—, porque lo hacían entrar y estaba presente y había movilizaciones donde se planteaba que era necesario inflar las penas como respuesta concreta para solucionar el problema de la seguridad. Sin embargo, quedó demostrado, en la práctica, que eso no era así, y que lo único que hicimos fue deformar el Código Penal. Resultaron absolutamente ineficaces aquellas leyes que se aprobaron, a las cuales muy pocos nos opusimos.

Entonces, quiero referirme ahora a los interrogantes que surgen acerca de por qué estamos abordando hoy esta temática. Es el GAFI el que, con ese eufemismo que dicen las recomendaciones, nos está obligando hoy a tomar esta determinación.

Quiero leer el informe del GAFI, una parte del cual ya leyó el senador Sanz. Llama la

atención, porque en el aspecto de la soberanía de un Congreso alarma que un organismo internacional nos diga que la reglamentación del financiamiento del terrorismo en el artículo 213 quáter, en relación con el artículo 213 ter del Código Penal, es muy limitada y claramente insuficiente.

El GAFI también nos dice que se debería ampliar el terrorismo y el FT para eliminar las actuales limitaciones en cuanto a las organizaciones terroristas, y que la Argentina debería tipificar específicamente la recolección o provisión de fondos para uso, para cualquier fin, de un terrorista individual o de un acto terrorista fuera del contexto de una organización terrorista y asegurar que queden claramente cubiertos todos los actos de terrorismo mencionados en el artículo 2º a) y b) de la Convención contra el Terrorismo.

Quiero decir qué es el GAFI, porque parecería que el GAFI es bárbaro, que lo que nos diga lo tenemos que cumplir. Está claro que el FMI es malo, pero el FMI es parte del GAFI y el Banco Mundial también es parte del GAFI.

El GAFI es un organismo internacional formado por el G7 —es decir, los países poderosos del mundo— en el año 1989, que en el año 1990 determinó 40 recomendaciones. Pero esas 40 recomendaciones del GAFI las profundizaron, las mejoraron y las ampliaron a partir del 11-S, es decir del atentado a las torres. Es así que en el año 2003 se incorporaron nueve recomendaciones con una clara lógica política e ideológica del Acta Patriótica de Bush, que inundó el mundo con esa ideología y esa propuesta de combate al terrorismo. Eso es lo que estamos siguiendo hoy al pie de la letra, a pie juntillas: lo que nos está diciendo el GAFI.

Entonces, yo creo que tenemos que ver también, porque así como resaltábamos en el debate anterior, si antes hablábamos de la importancia del Mercosur, de la UNASUR, de la CELAC, de dar una respuesta ante el camino equivocado que llevaba el Primer Mundo en estos momentos; parece que en esta cuestión el camino que nos muestran es el verdadero, el correcto, y lo tomamos sin ningún tipo de análisis. Pero Brasil, por ejemplo, le da otra respuesta.

Estos organismos tienen tanta plata como tiene el FMI, y ustedes saben cómo funcionan: tienen consultores pagos que tienen que justifi-

car los miles de dólares que cobran y entonces viven haciendo informes. Entonces, respecto a Brasil –que ustedes saben que no tiene ninguna norma–, el GAFI Sud –porque tiene una sede especial para nosotros– dice que aun cuando Brasil ha firmado y ratificado la Convención de las Naciones Unidas para la Supresión del Financiamiento del Terrorismo –Convención de Financiamiento del Terrorismo–, no ha tipificado el financiamiento del terrorismo en forma consistente con la recomendación especial 3. O sea que Brasil no lo hizo. ¿Y qué termina diciendo? Se entrevistan con los funcionarios brasileños y terminan diciendo que Brasil no ha tipificado el financiamiento del terrorismo en forma consistente con la recomendación especial 3. El financiamiento de actos terroristas no se encuentra encuadrado como un delito autónomo. Durante la visita las autoridades brasileñas hicieron énfasis en su compromiso de cumplir con las obligaciones internacionales, pero más que nada expresaron que el terrorismo y el lavado de dinero no constituyen problemas en Brasil. Es decir, les dijeron: “Señores, está todo muy bien, pero acá en Brasil decidimos nosotros”.

Entonces, a mí me parece que por una cuestión de armonización de las normas en el marco del Mercosur debemos coordinar las acciones. ¿Cómo no vamos a coordinar estos temas los países del Mercosur? Es verdad lo que se ha planteado acá en cuanto a que, por ejemplo, en Chile existe una legislación que ha significado un problema político gravísimo porque la criminalización de la protesta se ha hecho sobre los mapuches. Ese tema ha motivado un escándalo político en Chile.

Por supuesto que compartimos que este gobierno no quiera criminalizar la protesta. Está bien, pero ustedes deben aceptar, y cualquier abogado que lea esta norma así lo entenderá, que con esto abren la puerta a la criminalización de la protesta, como dijo muy claramente el señor senador Sanz. Y no se trata del gobierno, sino de los jueces, porque aquí no estamos sancionando una norma para un gobierno. Las leyes no tienen nombre y apellido; entonces, esto es un grave retroceso, muy serio, y a mí me parece que la prudencia indica que este tema debe ser debatido con responsabilidad y en profundidad, escuchando a las organizaciones de derechos

humanos y no tomando tan al pie de la letra lo que dicen organismos internacionales devaluados por haber hecho muy mal las cosas y por presentar connotaciones claramente ideológicas en cada una de las recomendaciones que hacen.

Además, yo creo que en este aspecto debemos dar una respuesta conjunta desde los países del Mercosur, de la UNASUR y de la CELAC porque éste es un tema demasiado serio como para que genere tantas dudas y abra tantos interrogantes. Desde mi punto de vista, genera un claro retroceso en materia de derechos humanos.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.

Sr. Rodríguez Saá. – Señora presidenta: el Interbloque Federal va a votar en la forma que ha explicado la señora senadora por Salta, quien lo ha hecho con muchísima precisión. Así que doy por fijada la posición del Interbloque Federal.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.

Sr. Petcoff Naidenoff. – Señora presidenta: yo voy a referirme concretamente a las modificaciones del Código Penal que tienen que ver con la prevención, investigación y sanción de las actividades terroristas porque considero que el señor senador Ernesto Sanz fue absolutamente claro y contundente en cuanto a estos tres temas, en su carácter de miembro informante. Solamente quiero señalar algunos aspectos que me parecen importantes, independientemente de que pueda pecar de reiterativo en relación a esta cuestión.

En primer lugar, deseo señalar que nuestro país forma parte del grupo de países que asumieron en la década del 60 la lucha contra las actividades terroristas en el contexto internacional. Y en ese marco la Argentina, a través de la ley 26.024, aprobó el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, que exigió la tipificación en forma autónoma del delito de financiamiento del terrorismo.

Más allá de ser parte del Grupo de Acción Financiera Internacional, que establece una serie de parámetros o recomendaciones que debe cumplir el país en cuanto a las actividades que son consideradas como terroristas y el propio financiamiento, siempre ha existido –como

aquí se ha dicho— dificultad para definir qué se considera terrorismo o actos de terrorismo a nivel internacional. Dicho inconveniente se hizo palmario cuando se discutió —como también lo expresó el senador Sanz— el Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional. Se prescindió de introducir algún tipo de caracterización para evitar, justamente, la ambigüedad en la conceptualización de un término tan importante desde el punto de vista del derecho penal.

En 2007, en función de esos antecedentes —es decir, del Estatuto de Roma y de los compromisos asumidos por la Argentina desde la década del 60—, cuando tratamos este tema en el Congreso, lo que hemos hecho, de una manera muy particular, es dar sanción a la modificación del Código Penal. Así, introducimos los artículos 213 ter y 213 quáter. Con ellos, se incorporaron las figuras de las actividades terroristas en el marco de la asociación ilícita y la financiación de una asociación de esta naturaleza o de uno de sus miembros. Ello, por cuanto el país necesariamente debía contar con una norma de estas características.

Pero en ese debate, que fue muy rico, por cierto, vale recordar las consideraciones de la miembro informante, la senadora Vilma Ibarra, respecto de la importancia de la caracterización de este delito y de cuáles eran los parámetros con que la legislación argentina debía manejarse en cuanto a esta cuestión. Esa sesión fue la del 6 de junio de 2007 y nuestro bloque votó en disidencia parcial, justamente, porque no estaba de acuerdo con caracterizar este tipo de figuras en el contexto de la asociación ilícita y en el marco del propio Código Penal. Esto fue así dado que las recomendaciones se orientaban a contar con esta figura pero como una legislación específica, bien encuadrada y bien contextualizada.

¿Qué nos decía la miembro informante del oficialismo en aquella oportunidad?

Decía la senadora respecto de la definición que proponía el proyecto del Poder Ejecutivo que se ha planteado en el ámbito internacional la forma en la cual se incorporan al derecho interno los actos terroristas, porque lo cierto es que esto comprende una decisión muy compleja, puesto que a la hora de incorporarlos al ámbito interno, debemos encontrar una definición que, por un lado, permita encontrar a quienes cometen y financien los actos de terrorismo y, por el

otro lado, tenga techos y clausuras que impidan que este tipo penal se utilice para criminalizar o penalizar otro tipo de actividades delictivas de grupos de crimen organizado, o para la penalización de actividades de protesta violenta. Esto fue expresado por la miembro informante del oficialismo.

Además, la senadora expresó que se trata de una figura para tutelar el bien jurídico de orden público —es decir, el bien jurídico era el bien a tutelar— que autoriza un adelantamiento en la punibilidad de actos preparatorios de delitos, entendiendo que son peligrosos para terceros y lesivos del bien jurídico orden público. El tipo penal es de mero peligro. Es tomar parte de la asociación ilícita terrorista, independientemente de que después se cometan o no los actos terroristas. Es un límite; una cláusula dura para que no pueda extenderse la aplicación de la figura de la asociación ilícita terrorista a otro tipo de delitos o de actos violentos de protesta social, como en algunos casos se temió que pudiera ser utilizada.

La Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico la presidía la senadora Escudero. En esa ocasión, la senadora Escudero, con relación a la caracterización de la asociación ilícita terrorista, expresaba también que, con este criterio, dejamos afuera cualquier forma de organización interna, por violenta que sea, que estará comprendida con otras de las figuras de nuestro Código Penal.

Como les decía, nuestro bloque acompañó en disidencia porque había que cumplir con las mentadas recomendaciones. Pero nosotros considerábamos que lo más adecuado habría sido contar con una figura autónoma, con un tipo penal concreto en una ley especial complementaria, que diera cabida a otro tipo de situaciones que ese proyecto no contemplaba. Pues bien, en esta oportunidad, como en aquella, una vez más estamos ante la disyuntiva de cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional.

Si uno analiza la documentación de la evaluación mutua de la Argentina con las misiones del GAFI, podrá apreciar que el problema de nuestro país no es una falta de legislación; esto lo ha dicho el propio GAFI. Lo que ha dicho es que la Argentina tiene que demostrar ahora que sus delitos son verdaderamente efectivos,

aplicándolos y obteniendo condenas. En conclusión: no cuestionó la falta de legislación sino la no aplicación de leyes vigentes. Lo que se cuestionó es la impunidad, la falta de condenas y la falta de recursos para las agencias que tienen que ocuparse de promover la persecución de este tipo de delitos.

¿Cuál es el inconveniente de la incorporación del artículo 41 quinquies al Código Penal? A primera vista, hay dos grandes inconvenientes. En primer lugar, que se establece una agravante genérica de la mitad del mínimo y del máximo para cualquier delito cometido con la finalidad terrorista. Es decir que estamos lejos de contar con una legislación específica. De hecho, en definitiva, en esa línea se encaminaban las propias recomendaciones y el compromiso que asumió oportunamente el país.

¿Por qué esto no es conveniente? Porque ataca el principio de legalidad. Este principio hace referencia, fundamentalmente, a la clara definición de la conducta incriminada, fija sus elementos y, en definitiva, en última instancia, la ponderación la efectúa un juez en cuanto a los criterios que puedan constituir una conducta incriminada o no.

Así llegamos a algunas manifestaciones muy particulares en cuanto a cómo se puede interpretar hoy por hoy, en la Argentina, una actividad de carácter terrorista, como lo ha expresado el propio titular de la UIF. Pero, sin entrar en ese caso, lo que sí preocupa –y seguramente se ha resaltado en más de una oportunidad– es la posibilidad de avanzar en la represión de la protesta social. Digo esto porque hay un agregado que establece el artículo.

Supuestamente, en reunión de la Comisión de Justicia, se había dicho que la voluntad de la propia presidenta era dejar a salvo las protestas sociales de este tipo de incriminaciones concretas; y el oficialismo cree que esto está salvado con el solo hecho de especificar en la parte final del artículo 41 que no aplicarán los agravantes cuando el o los hechos de que se trate tuvieron lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional.

En realidad, más allá de lo que expresa la intención del Ejecutivo, creo que aquí, indefectiblemente, vamos camino a la criminalización de la protesta social y a que una protesta social

pueda ser caracterizada con la finalidad de aterrorizar a la población. En tal sentido, voy a citar dos fallos que van en esta línea: el fallo de la Sala Primera, Cámara Nacional de Casación Penal, donde se condenó a Marina Schiffrin a la pena de tres meses de prisión en suspenso y costas como coautora penalmente responsable del delito de impedir y entorpecer el normal funcionamiento de los medios de transporte por tierra y aire sin crear una situación de peligro común. Se trataba de una protesta social.

En algunos de sus considerandos, se decía que mal entonces puede ejercerse el derecho de peticionar ante las autoridades establecido en un artículo de la Constitución Nacional, que asume los caracteres de reunión cuando la petición se hace colectiva, desarrollando conductas que coincidan con una de las descripciones prohibidas –capítulo II, título VII, libro 2° del Código Penal–. Evidentemente, el medio empleado en esta emergencia impide la concurrencia de una justificante idónea para legitimar el proceder acreditado en autos. Es que, además, la propia Constitución Nacional, en su artículo 22, establece que el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuyan derechos del pueblo y peticionen en nombre de éste comete delito de sedición. Va de suyo, entonces, que aquel derecho no comprende las acciones realizadas de un modo que colisione con las leyes y afecte el bien jurídico.

¿Qué quiero decir con esto? Hay fallos concretos, como el otro fallo de la Cámara Nacional de Casación “Molina, Rita Ester s/recurso de casación”, que han establecido que las protestas sociales afectan el orden constitucional; y si una protesta, para nuestros tribunales, afecta el orden constitucional –cortes de ruta; independientemente de que estamos en un límite muy particular, porque cortar una ruta implica, justamente, el violentar la propia Constitución–, en el marco de la habitualidad de las protestas sociales como herramientas de reclamo que han efectuado muchas organizaciones sociales, tranquilamente, estas organizaciones pueden ser incriminadas con la apertura de este artículo por la finalidad de aterrorizar a la población y soportar las consecuencias que prevé este propio artículo.

El senador Giustiniani ha hecho referencia a las opiniones del CELS sobre este tema. Solamente, quiero decir que, en una carta abierta del Centro de Estudios Legales y Sociales, se expresó que, si bien el proyecto establece que el agravante no se aplicaría en el caso de que se trate del ejercicio de un derecho constitucional, este criterio no garantiza que líderes sociales no sean perseguidos y sometidos a procesos bajo estas nuevas figuras ligadas al terrorismo, lo que de por sí implicaría someterlos a una fuerte presión para abandonar sus reclamos. Dada la amplitud e imprecisión de los términos, se invierte la carga de la prueba y serán ellos los que deberán probar, en el marco de los procesos penales, que no son terroristas. No lo decimos nosotros, lo dice el Centro de Estudios Legales y Sociales.

Otro cuestionamiento muy fuerte de esta reforma tiene que ver con las atribuciones de la Unidad de Información Financiera, que puede disponer, mediante resolución fundada y con comunicación inmediata al juez competente, el congelamiento administrativo de activos vinculados con las acciones delictivas previstas en el 306. Nosotros no estamos de acuerdo con esta redacción. Creemos que la UIF podrá disponer mediante resolución fundada el embargo, pero que esta medida debe ser inmediatamente comunicada al juez y es el juez quien deberá convalidar la medida en el plazo de tres días, prorrogable por otro período igual. Si el juez resuelve convalidarla, deberá fijar un plazo máximo de extensión del embargo que no podrá exceder los seis meses y que podrá ser prorrogable a pedido de la UIF por otro período igual en caso de agravios complejos. El recurso de apelación se concede con efecto devolutivo.

Me parece que la amplitud de atribuciones que se le confiere a la Unidad de Información Financiera de disponer congelamientos administrativos con el solo propósito de que dicha medida se comunique a un juez y no se garantice el debido derecho de defensa vulnera todo tipo de garantías constitucionales como para que este proyecto, real y objetivamente, se torne peligroso. Porque desde un simple reclamo social o una protesta, los individuos quedan sometidos a la interpretación de un juez, y cómo interpreta el último tramo del 41 para saber si constituye una

actividad terrorista o no. Por eso, nosotros no estamos de acuerdo con este proyecto.

Creo que es un retroceso. Nos parece que no sería necesario agravar todos los tipos penales del Código Penal sino que, para ser coherentes con la posición que sostuvimos en 2007 y que va en línea con la misma posición que sostuvo el miembro informante del oficialismo, bastaría con una legislación penal precisa —una ley especial— que describiera el tipo penal del terrorismo o de los actos terroristas que se acotarán a los estrictos estándares internacionales para evitar definiciones genéricas que, en definitiva, los jueces resuelvan sobre un tema tan trascendente.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). — Tiene la palabra el senador Fuentes.

Sr. Fuentes. — Señora presidenta: escuché con suma atención —aunque parece que no viene al caso— a la senadora Montero, por la provincia de Mendoza, cuando describió cuál era el camino en la construcción del diálogo político que entendía como ideal para sostener estos debates.

Honrando esa descripción de la senadora, el senador Sanz creo que ha cumplido cabalmente con ese cometido a partir de reconocer, en una proyección hipotética, que podía haber consecuencias más allá de la voluntad de este bloque, lo cual otros senadores no han hecho. Entonces, es totalmente distinto, en un camino de discusión, decir que “esta norma, en función de los vacíos eventuales que puede tener, implica que ustedes quieren perseguir o que esta norma podría dar motivo de persecución si fuese mal utilizada por otros”. Primera cuestión: esto permite saber que estamos discutiendo un problema desde una lectura y una preocupación común.

Se hizo mención al GAFI. ¡Ojalá nuestro país tuviera el potencial, la magnitud y el poderío para imponer normas al Grupo de los 7 o al Grupo de los 20! Pero evidentemente, en discusiones anteriores, cada vez que se lo mencionaba, siempre había unanimidad de todos los senadores de reconocer que era necesario que la Argentina mantuviera esos compromisos, porque eso generaba la posibilidad de acceder a créditos con tasas diferentes a las que hoy pagamos, castigados en los mercados internacionales. Es decir, acá hay un claro caso de lo que se llama el dilema del legislador. Y voy a pasar a explicarlo.

El Código Penal, como la expresión de la ley penal, a lo largo de siglos –siglo y medio, diría–, expresaba una consolidación pétrea de valores y de hermenéutica jurídica. Esto significa que la dinámica de la evolución de la sociedad en función de la irrupción de tecnologías, de culturas y de comunicaciones distintas, se plasmaba en el ámbito de otras disciplinas del derecho; es decir, un derecho penal inamovible, de lenta mutación y derechos dinámicos en constante evolución, según la etapa del desarrollo y la acumulación particular que en el momento histórico se daba. Un ejemplo de ello es que el ascenso de las clases trabajadoras a la distribución y a la discusión del poder genera una dinámica de avanzada del derecho laboral.

La participación activa de un Estado en la compensación de las desigualdades genera una evolución y una dinámica del derecho administrativo que van a una velocidad donde, tanto derecho penal como derecho civil –como elementos más pétreos y consolidados de presuntos valores estables–, se van modificando en poco tiempo. Pero hete aquí que el mundo cambia súbitamente y lo que durante 60 años era más fácil o probable, como ensayar una reforma constitucional que no modificara un Código Penal, a partir de las nuevas exigencias no es tan así.

Muchos senadores han participado permanentemente de debates internacionales, de asociaciones internacionales donde se habla de las nuevas amenazas, donde –desde hegemonías políticas claras en el mundo– se intenta imponer lecturas direccionadas de lo que debía ser la legislación. Hay fenómenos que hoy se dimensionan a través de delitos con utilización de la electrónica; delitos que hacen a la existencia de organizaciones cuya capacidad económica equipara a la de los Estados.

Nuestro jefe de bloque, reiteradas veces, ha hablado de lo que implica y de las consecuencias que han traído en el incremento de la actividad delictiva ciertas situaciones. Sin que esto implique un prejuicio o discriminación sobre ningún grupo nacional, tenemos el caso de la disolución de la Unión Soviética, con la proliferación de las mafias del Cáucaso; de los negocios de la droga: del opio, de la amapola o lo que sea. Todo esto genera el escenario de un universo de delitos

para los cuales nuestra estructura legal-penal no estaba preparada.

Es más, en carne propia, en una historia dolorosa y reciente, ¿quién podía prever códigos o normas legales para juzgar los genocidios cometidos por el propio Estado? Es evidente que, ante la necesidad de afrontar esa reparación histórica de verdad y justicia, se debió recurrir a elementos innovadores e inéditos para poder satisfacer la necesidad y la demanda de Justicia.

Nuestra memoria en torno de los actos de terrorismo es una memoria donde tres actos, diría yo, generan una aproximación a esa descripción en sus visiones y consecuencias: el salvaje bombardeo de la Plaza de Mayo por la aviación de guerra naval contra las masas de trabajadores indefensas que fueron a defender a Perón, masacrándolas en un acto de terror inolvidable e imperdonable; y los salvajes atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel.

Ese dilema –dilema del legislador– nos trae a escena la cuestión planteada por la senadora Escudero. Es decir, quienes son combatientes de libertad, para otros, son simples terroristas. Esto, básicamente, tiene un condicionante político-cultural que es la expansión del colonialismo europeo y los procesos de luchas de emancipación sociales y políticas en sus ex colonias.

El ejemplo más gráfico que tenemos –porque como generación, fuimos profundamente impactados por esa película extraordinaria de Giulio Pontecorvo, *La batalla de Argel*– es el proceso de lucha por la emancipación nacional del Frente de Liberación Argelino, donde ya entra el primer dilema en la cuestión. Acorde-mos que esos actos de emancipación violentos y caracterizados como de terror por los franceses eran correspondidos por la OAS, la organización secreta del ejército francés, que realizaba lo mismo. Mientras unos colocaban bombas en la Casbah, los otros colocaban bombas en la ciudadela europea.

Esto traía como consecuencia el primer dilema: qué sistema de defensa aplicar cuando, por un lado, está el procesado al que el europeo considera terrorista y, por el otro, su abogado argelino que lo veía como un patriota. ¿Cómo fue? No había antecedentes, no existían. El Frente Argelino desarrolla su dilema en lo que se llama proceso de connivencia y proceso de

ruptura. Cuando el conjunto de las pruebas acumuladas contra el imputado eran de tal magnitud que no cabía que ese tribunal colonial pudiese conmutarlo o declararlo inocente, el abogado defensor optaba por el proceso de ruptura: le negaba la jurisdicción, la competencia y la legalidad al tribunal. Cuando había elementos que permitían una defensa eficaz: proceso de convivencia.

¿Qué quiero significar con esto? Que este dilema del legislador nos pone en una situación donde no hay respuestas únicas, porque esas respuestas están profundamente condicionadas por el conjunto de prejuicios políticos y de intereses geopolíticos que hoy circulan en el mundo. El ejemplo: el Departamento de Estado americano tiene una lista de organizaciones terroristas donde, fundamentalmente, independiente de sus métodos, tiene en cuenta cuál es, a su entender, legítimo interés geopolítico y qué organización de ese tipo conspira contra él.

Es el dilema del legislador con el cual nos encontramos. Queremos participar, queremos estar como miembros plenos de esta organización de control financiero que exige el dictado de determinadas normas. Pero, por otro lado, no queremos –dilema del legislador– tipificar de manera que nos obliguen condicionantes ni culturales ni geopolíticos; esto es, la tipificación plena de una figura.

¿Cuál es la solución? ¿Cómo se resuelve el dilema el legislador? Toma un camino inédito. Es decir, en vez de describir un tipo penal –en la observación que hacía legítimamente el senador Sanz, él decía que el tema era la tipicidad y la legalidad–, toma un camino donde, fundamentalmente, pone límites a la expansión y a la capacidad punitiva de la norma al duplicar los delitos cometidos en ocasión del acto terrorista. La limitación a esa aplicación está dada por otra institución del derecho, que es la hermenéutica jurídica.

Acá, a veces, da la impresión de que olvidamos lo que son técnicas judiciales o lo que conforma el plexo normativo como una unidad integrada con garantías consolidadas. Es más, afirmo que esa garantía, que se pone hasta por un exceso de prudencia descriptiva y, fundamentalmente, sabiendo que la discusión iba a ser esa, no hacía falta, porque hay suficientes garantías en nuestra estructura jurídica, en nuestro orden

constitucional y en lo que conforma el cuadro de jurisprudencia para interpretar la norma en el alcance real que tiene.

Es decir, una norma no inaugura el derecho. Una norma es un elemento que se desenvuelve armónicamente en un conjunto racional manejado por la lógica formal jurídica. Entonces, si no comenzamos a entender eso, no estamos discutiendo derecho. En consecuencia, pretender que el gobierno argentino dote de una norma que otro gobierno pueda utilizar para generar persecución de la protesta social es, como mínimo, una liviandad.

Acá, quiero señalar, simplemente, una cuestión. Hace rato que la senadora Morandini manifiesta una gran preocupación –y entiendo desde qué lectura lo hace– en torno a la cuestión de las palabras. Quiero decir a la senadora Morandini con todo respeto que ese proceso negro de terror y violencia que las fuerzas armadas descargaron en la Argentina no se debió a la interpretación mala de una palabra. No se puede creer que la represión desarrollada en el marco de la dictadura se produjo porque la palabra “aniquilar” generaba no precisiones al respecto. Yo entiendo el sentido en que usted lo dice; pero, como también recalca la importancia de la palabra, me veo en la obligación de señalarlo.

Es decir, tenemos una necesidad, en un mundo en crisis, de resolver con claridad una cuestión donde no somos los que determinamos las reglas. Pero sí hemos elegido un camino soberano: legislar de acuerdo con nuestra tradición. Esto trae otra consecuencia, que sí es la más grave, con la que estamos todos de acuerdo y hemos discutido. Todos estos convenios internacionales, todos estos tratados celebrados, todas estas leyes especiales, fundamentalmente, han generado un queso gruyere que es el Código Penal.

Ese código, dictado en un momento histórico determinado, claramente estableció una parte general con descripciones comunes a la totalidad de los delitos: la autoría, la culpabilidad, la tipicidad, la antijuridicidad, agravantes, atenuantes, tentativa. Existe un orden de prelación de valores y de bienes jurídicos tutelados. Este bien jurídico tutelado al cual esta sociedad concreta, en este momento, entiende que es el más valioso, lo dota de la mayor sanción posible y,

así, en orden descendiente, en torno a la pérdida de ese valor.

Hace pocos días, incorporamos a ese código un nuevo capítulo de bienes jurídicos tutelados, que es el de los delitos contra la administración del orden financiero y económico. Sobre todo a partir del recuerdo de la descripción que tantas veces hace el senador Artaza, a los señores representantes de los bancos extranjeros y nacionales, con todo respeto, les recordé que, de haber tenido normas eficaces penales que sancionaran esas conductas, muchos de ellos no habrían estado en ese momento participando en el debate sino entre rejas. De hecho, el ministro no sólo vino a confirmar en la reunión de senadores que esa garantía de no persecución de la protesta social no era simplemente una cuestión teórica; estaba afirmado con el compromiso de la propia conducta. Podemos discutir; uno admite que se discuta si estoy confundido conceptualmente, pero no admito que se discuta cuál es la conducta que tenemos detrás en torno a esa cuestión.

Entonces, en ese debate con el ministro de Justicia, todos los presentes estuvimos de acuerdo en la necesidad de desarrollar una reforma integral del Código Penal sobre la base de estas perforaciones, de estos vacíos, de estas inconsistencias. ¿Cómo no voy a coincidir yo en que, desde un punto de vista clásico y armonioso de la tipicidad como el elemento dentro de la lógica alemana de determinación lógico-formal del delito, tenemos vacíos? Pero esos vacíos, en última instancia, han sido generados en el marco de ese dilema: cómo garantizamos cumplir con los compromisos internacionales que celebramos sin invadir ni modificar aún más ese deteriorado Código Penal. Entonces, ¿qué hemos hecho, señores? Hemos hecho un agravamiento de los delitos que se realicen con ocasión o motivo de los actos terroristas, conducentes a la comisión del acto terrorista, estableciendo una clara limitación que, de ninguna manera, ningún delito cometido en ocasión o en el ejercicio del legítimo derecho puede conformar delito. Y creo que eso es una garantía que, por lo menos, a nuestro bloque nos da la tranquilidad de saber que estamos cumpliendo con un compromiso internacional tomado y que, de ninguna manera, ocasionamos un perjuicio a nuestro pueblo, a nuestra gente.

Por eso, el Frente para la Victoria va a acompañar la totalidad de las normas como están presentadas en el despacho en mayoría.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Vamos a pasar a votar.

Sr. Secretario (Estrada). – En primer lugar corresponde habilitar el tratamiento sobre tablas de los tres temas, porque no lo hemos hecho al comienzo.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Se va a votar la habilitación sobre tablas.

–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Queda habilitado el tratamiento sobre tablas.

Sr. Secretario (Estrada). – Orden del Día N° 924. Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión por el que se incorporan en el título XIII del Código Penal de la Nación las principales conductas punibles que afectan al orden económico y financiero. (C.D.-88/11.)

Sr. Pichetto. – Vamos a votarlo en general y en particular.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si están todos de acuerdo, así lo haremos senador Pichetto.

Si no se hace uso de la palabra se va a votar en general y en particular.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 46 votos afirmativos y 15 negativos.

–El resultado de la votación surge del acta correspondiente.¹

Sr. Secretario (Estrada). – Senadora Leguizamón: sírvase manifestar su voto a viva voz.

Sra. Leguizamón. – Mi voto es positivo.

Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia, 47 votos afirmativos y 15 negativos.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.²

Sr. Secretario (Estrada). – Orden del Día N° 923. Dictamen de la Comisión de Justicia y

¹ Ver el Apéndice.

² Ver el Apéndice.

Asuntos Penales en el proyecto de ley venido en revisión por el que se modifica el Código Penal de la Nación en materia de prevención, investigación y sanción de actividades delictivas con finalidad terrorista. (C.D.- 87/11.)

Sr. Pichetto. – En una sola votación en general y en particular.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si hay acuerdo, así lo haremos.

Sr. Cabanchik. – Presidenta: ¿no podemos hacer una votación en general por un lado y, en particular, por otro? ¿Es el proyecto que acabamos de discutir, verdad?

Sr. Secretario (Estrada). – Sí.

Sr. Cabanchik. – No sé, yo tengo reparos en votar el artículo 3º tal cual está.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si a usted le parece, hacemos mención de lo que va a votar.

Sr. Cabanchik. – Señalo mi disidencia con respecto al artículo 3º, que incorpora el artículo 41.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si no se hace uso de la palabra se va a votar en general y en particular.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 39 votos afirmativos y 22 negativos.

–El resultado de la votación surge del acta correspondiente.¹

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.²

Pasamos a votar el Orden del Día N° 922, proyecto de ley en revisión por el que se modifican diversos artículos de la Ley Penal Tributaria y modificación del artículo 76 bis del Código Penal de la Nación. (C.D.- 86/11.)

Tiene la palabra el señor senador Sanz.

Sr. Pichetto. – Que se haga una sola votación.

Sr. Sanz. – Señora presidenta: si se va a hacer una sola votación, queremos dejar sentado que vamos a votar afirmativamente en general

y en particular en forma negativa los artículos 16 y 19.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si ningún otro señor senador va a hacer uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola votación.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 63 votos afirmativos. Unanimidad en general. En particular se deja constancia de la reserva en los artículos 16 y 19 hecha por el señor senador Sanz para el bloque de la Unión Cívica Radical.

–El resultado de la votación surge del acta correspondiente.³

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.⁴

14

CUARTO INTERMEDIO

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Señora presidenta: quiero solicitar que se pase a cuarto intermedio para mañana a las 13 horas. Además quiero informar que la Comisión de Acuerdos, debido al ingreso de los pliegos militares, se va a reunir a las 12 horas.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar pasar a cuarto intermedio para mañana a las 13 horas.

–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Aprobado.

Se pasa a cuarto intermedio hasta las 13 horas.

–Es la hora 1 y 21 del jueves 22 de diciembre de 2011.

JORGE A. BRAVO,
Director General de Taquígrafos.

¹ Ver el Apéndice.

² Ver el Apéndice.

³ Ver el Apéndice.

⁴ Ver el Apéndice.

Votación Nominal**129º Período Legislativo - Extraordinario - 2º Sesión**

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN POR EL CUAL SE INCORPORA AL TÍTULO XIII DEL CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN LAS PRINCIPALES CONDUCTAS PUNIBLES QUE AFECTAN EL ORDEN ECONÓMICO Y FINANCIERO

ORDEN DEL DÍA 924 Y ANEXO
(CD-88/11)

VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Observaciones: Dictamen de mayoría

Acta Nº 22

Fecha 22-12-11

Hora 1:17

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Mayoría Requerida

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente:

ROJKES DE ALPEROVICH, Beatriz L

Desempate: NO

Presentes Identificados: 61

Presentes No Identificados: -

Total Presentes: 61

Ausentes: 11

Votos Afirmativos Necesarios: 31

Votos afirmativos: 46

Votos Negativos: 15

Abstenciones: -

**RESULTADO de la
VOTACIÓN AFIRMATIVA**

Informe de auditoria de modificaciones

	Versión Original	Actual
LEGUIZAMÓN, María Laura	AUSENTE	AFIRMATIVO
LÓPEZ, Osvaldo Ramón	Lev. Vot.	AUSENTE

Observaciones:

La senadora Leguizamón se levantó durante la votación y manifiesta a viva voz su voto afirmativo y el senador López se levantó durante la votación anulando el sistema el voto emitido.

Modificaciones realizadas el 22/12/11

Presentes Identificados: 61

Presentes No Identificados: 1

Total Presentes: 62

Ausentes: 10

Votos Afirmativos Necesarios: 32

Votos afirmativos: 47

Votos Negativos: 15

Abstenciones: -

**RESULTADO de la
VOTACIÓN AFIRMATIVA**

Votación Nominal**129º Período Legislativo - Extraordinario - 2º Sesión**

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN POR EL CUAL SE INCORPORA AL TÍTULO XIII DEL CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN LAS PRINCIPALES CONDUCTAS PUNIBLES QUE AFECTAN EL ORDEN ECONÓMICO Y FINANCIERO

ORDEN DEL DÍA 924 Y ANEXO
(CD-88/11)

VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Observaciones: Dictamen de mayoría

Acta N° 22

Fecha 22-12-11

Hora 1-17

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Mayoría Requenda:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente:

ROJKES DE ALPEROVICH, Beatriz L

Desempeño: NO

Apellido y Nombre	VOTO	Apellido y Nombre	VOTO
AGUIRRE, Hilda Clelia	AFIRMATIVO	LABADO, María Ester	AFIRMATIVO
ARTAZA, Eugenio Justiniano	NEGATIVO	LATORRE, Roxana Itatí	AFIRMATIVO
BARRIONUEVO, Walter Basilio	AFIRMATIVO	LEGUIZAMÓN, María Laura	LEV.VOT
BASUALDO, Roberto Gustavo	AFIRMATIVO	LINARES, Jaime	NEGATIVO
BERMEJO, Rolando Adolfo	AFIRMATIVO	LOPEZ, Osvaldo Ramón	LEV.VOT
BIANCALANI, Fabio Darío	AFIRMATIVO	LORES, Horacio	AFIRMATIVO
BLAS, Inés Imelda	AFIRMATIVO	LUNA, Mirtha María Teresita	AFIRMATIVO
BONGIORNO, María José	AFIRMATIVO	MANSILLA, Sergio Francisco	AFIRMATIVO
BORELLO, Marta Teresita	NEGATIVO	MARINO, Juan Carlos	AUSENTE
CABANCHIK, Samuel Manuel	AFIRMATIVO	MARTINEZ, Alfredo Anselmo	NEGATIVO
CABRAL, Salvador	AFIRMATIVO	MAYANS, José Miguel Ángel	AFIRMATIVO
CANO, José Manuel	NEGATIVO	MEABE de MATHO, Josefina Angélica	AFIRMATIVO
CASTILLO, Oscar Anibal	AUSENTE	MENEM, Carlos Saúl	AUSENTE
CIMADEVILLA, Mario Jorge	NEGATIVO	MONLLAU, Blanca María del Valle	NEGATIVO
COLAZO, Mario Jorge	AFIRMATIVO	MONTERO, Laura Gisela	NEGATIVO
CORRAZI de BELTRÁN, Ana María	AFIRMATIVO	MORALES, Gerardo Rubén	NEGATIVO
CORREGIDO, Elena Mercedes	AFIRMATIVO	MORANDINI, Norma Elena	NEGATIVO
DE LA ROSA, María Graciela	AFIRMATIVO	NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita	AUSENTE
DI PERNA, Graciela Agustina	AFIRMATIVO	NIKISCH, Roy Abelardo	NEGATIVO
DÍAZ, María Rosa	AFIRMATIVO	PARRILLI, Nando María Agustina	AFIRMATIVO
ESCUERO, Sonia Margarita	AFIRMATIVO	PEREZ ALSINA, Juan Agustín	AFIRMATIVO
ESTENSSORO, María Eugenia	AUSENTE	PERSICO, Daniel Raúl	AFIRMATIVO
FELLNER, Liliana Beatriz	AFIRMATIVO	PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos	NEGATIVO
FERNANDEZ, Anibal Domingo	AFIRMATIVO	PICHETTO, Miguel Angel	AFIRMATIVO
FILMUS, Daniel Fernando	AFIRMATIVO	RACHED, Emilio Alberto	AUSENTE
FUENTES, Marcelo Jorge	AFIRMATIVO	REUTEMANN, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GIMENEZ, Sandra Daniela	AFIRMATIVO	RIOFRIO, Marina Raquel	AFIRMATIVO
GIUSTINIANI, Rubén Héctor	NEGATIVO	RODRIGUEZ SAA, Adolfo	AFIRMATIVO
GODOY, Ruperto Eduardo	AFIRMATIVO	ROJKES de ALPEROVICH, Beatriz L.	AFIRMATIVO
GONZALEZ, Pablo Gerardo	AFIRMATIVO	ROLDAN, José María	AFIRMATIVO
GUASTAVINO, Pedro Guillermo Ángel	AFIRMATIVO	ROMERO, Juan Carlos	AFIRMATIVO
GUINLE, Marcelo Alejandro	AFIRMATIVO	RUIZ DÍAZ, Elsa Beatriz	AFIRMATIVO
HIGONET, María de los Angeles	AFIRMATIVO	SANZ, Ernesto Ricardo	NEGATIVO
IRRAZABAL, Juan Manuel	AFIRMATIVO	VERA, Arturo	AUSENTE
ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa	AFIRMATIVO	VERANI, Pablo	AUSENTE
JUEZ, Luis Alfredo	NEGATIVO	VERNA, Carlos Alberto	AUSENTE

y la modificación del artículo 23 del impuesto a las ganancias.

En los que se refiere a la modificación del artículo 23 del impuesto a las ganancias, estamos a favor de los artículos 1°, 2° y 3°, porque convalida normativas ya emitidas por el Poder Ejecutivo nacional dándole un marco constitucional, pero no estamos de acuerdo con el artículo 4° porque implica una delegación de facultades del Congreso, contraria a lo dispuesto por el artículo 76 de la Constitución Nacional.

Asimismo y por igual motivo, nos oponemos a la prórroga por un año más, de la ley 26.204 mediante la cual se declara la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando al Poder Ejecutivo facultades en las materias señaladas.

Conviene tener en cuenta, que esta emergencia fue sancionada cuando nuestro país atravesaba la crisis del 2001-2002, vale decir que aquel contexto de “emergencia” y excepcionalidad que señaló la Corte Suprema de Justicia de la Nación en numerosos fallos para justificar la delegación de facultades hoy, luego de 10 años, no existe.

Dificulta comprender la necesidad de esta prórroga cuando escuchamos al Poder Ejecutivo dando cuenta de los éxitos obtenidos, o cuando hacemos un análisis comparativo de los índices de desempleo, pobreza reservas, etcétera, de ese período y del actual. Dificulta también comprender la necesidad de una prórroga indiscriminada de temas que van desde el Plan Jefes y Jefas de Hogar, la emergencia alimentaria, la pesificación y medidas para paliar sus efectos, el canje de monedas provinciales, etcétera, medidas que sin lugar a dudas tenían que ver con el 2001 pero no se entienden en el 2012.

En este sentido, no hay más que atenerse al artículo 76 de la Constitución Nacional: “Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca...”.

Si vamos a acompañar al gobierno en la prórroga de los derechos de exportación a los hidrocarburos por el término de 5 años y parcialmente, en lo que se refiere a la prórroga de los impuestos de emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos y del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias.

Si bien entendemos la necesidad de no desfinanciar al gobierno nacional, no menos cierto es que los gobiernos provinciales tienen que afrontar gastos esenciales para la población, como la salud, educación y salud y no tiene la posibilidad que tiene el gobierno nacional de disponer de las utilidades del Banco Central o de financiarse con la ANSES. Contrariamente, las provincias siguen aportando de su coparticipación el 15 % para el financiamiento de un sistema previsional que no tiene

ninguna de las dificultades que tenía al momento de aceptarse esa detracción.

En el caso del cheque, se ha logrado que el gobierno nacional coparticipe un 30 % de lo que recauda, pero dada la detracción del 15 % a las provincias les llega una mínima parte.

Si miramos los valores acumulados al 2001, a las provincias le correspondieron alrededor de \$ 4.800 millones, cuando le hubieran correspondido \$ 18.800 si la coparticipación hubiera sido del 100 % sin detracciones para la ANSES.

Por este motivo solicitamos la coparticipación plena de ambos impuestos.

9

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA RIOFRIO

Modificaciones al Código Penal y a la Ley Penal Tributaria.

(O.D. N° 924/11, O.D. N° 923/11 y O.D. N° 922/11)

Señor presidente:

Los años de vigencia de la Ley Penal Tributaria, 24.769, imponen su adecuación a estos tiempos y a la situación actual del país. Por tal motivo, en el proyecto en tratamiento se reajustan los importes mínimos exigidos para considerar verificada la condición objetiva de punibilidad, con el fin de mantener una razonable proporción entre las distintas figuras típicas consideradas y la magnitud de la afectación del bien jurídico protegido en relación con el contenido del injusto de los diferentes delitos. Se busca también disminuir el flujo de nuevas causas en los juzgados con competencia en la materia y otorgar mayor eficacia disuasoria sobre la comisión de este tipo de ilícitos.

Con ese propósito, en el artículo 1° se eleva el parámetro del monto evadido a la suma de \$ 400.000 y quedan comprendidos en el tipo penal los tributos del fisco nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el artículo 2° (evasión agravada) se eleva el monto evadido a la suma de \$ 4.000.000 en el caso del inciso a) y a \$ 800.000 en los casos de los incisos b) y c) y se incorpora el caso de utilización de facturas o documento equivalente, ideológica o materialmente falsos.

En el supuesto de aprovechamiento indebido de subsidios (artículo 3°) también se eleva el parámetro del monto evadido a la suma de \$ 400.000.

En el artículo 4° referido a la obtención fraudulenta de beneficios fiscales quedan comprendidos en el tipo penal los tributos del fisco nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el caso del artículo 6° (apropiación indebida de tributos) se eleva el parámetro del monto no ingresado a la suma de \$ 40.000 y quedan comprendidos en el

tipo penal los tributos del fisco nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el artículo 7º referido a la evasión simple de recursos de la seguridad social se eleva el parámetro del monto evadido a la suma de \$ 800.000 y quedan comprendidos en el tipo penal los tributos del fisco nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el artículo 8º (evasión agravada) se eleva el monto evadido a la suma de \$ 400.000 en el caso del inciso a) y a \$ 160.000 en el caso del inciso b).

En el supuesto de apropiación indebida de recursos de la seguridad social (artículo 9º) se eleva el parámetro del monto no ingresado a la suma de \$ 20.000.

En el artículo 10 referido a insolvencia fiscal fraudulenta quedan comprendidos en el tipo penal tanto los aportes y contribuciones de la seguridad social nacional como los provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se prevé un tipo penal específico que contempla la modificación o adulteración de los sistemas informáticos o equipos electrónicos, suministrados y homologados por el fisco nacional, provincial o de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (artículo 12 bis).

Se dispone asimismo la sustitución del artículo 16 acentuando la percepción de riesgo al eliminarse de la ley el instituto de la extinción de la acción penal –por única vez– mediante el pago del importe evadido.

Para incentivar el cumplimiento espontáneo de los contribuyentes se incorpora una causal absolutoria, dejando exento de responsabilidad penal al obligado que regularice espontáneamente su situación (artículo 16).

Se extiende a 120 días hábiles el plazo dentro del cual debe expedirse el organismo recaudador para verificar y cuantificar la deuda conforme al procedimiento que corresponda (artículo 18).

Asimismo se dispone la derogación del artículo 19 equiparando la obligación de los funcionarios del organismo a la que recae sobre el resto de los funcionarios públicos del Estado nacional.

Se modifica también el artículo 20 de la ley 24.769 con la finalidad de evitar dilaciones en el proceso judicial de determinación de deuda cuando exista una causa penal y viceversa.

(C.D.-87/11)

Proyecto de ley en revisión modificando el Código Penal de la Nación en materia de prevención, investigación y sanción de actividades delictivas con finalidad terrorista

La Argentina, señor presidente, ha incorporado a su derecho interno las más importantes herramientas de derecho internacional, como son la Convención Interamericana contra el Terrorismo y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo (leyes 26.023 y 26.024, respectivamente). Asimismo, nuestro país ingresó oportunamente como

miembro pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a partir de lo cual se incorporaron a nuestra legislación tipos penales específicos vinculados con la materia, así como el de lavado de activos. De este modo en 2007 la Argentina incorporó a su legislación penal los delitos de asociación ilícita terrorista, en el artículo 213 ter y de financiación de este tipo de asociaciones, en el artículo 213 del Código Penal.

Pero como el terrorismo y su financiamiento son actividades delictivas complejas en permanente mutación, nuestro país enfrenta la necesidad de adecuar su normativa a las transformaciones registradas a nivel internacional.

Por tal motivo, en este proyecto se incorpora al Código Penal una nueva agravante en su parte general, por la cual se intensifica la pena de cualquier delito que sea cometido con finalidad terrorista y se reformula y reubica el delito de financiación del terrorismo.

Con la incorporación de un nuevo artículo 41 quinquies en el libro primero del Código Penal (parte general) se aclara que cualquier delito de la legislación argentina que se cometa con la finalidad terrorista, incrementará su pena el doble del mínimo y del máximo.

A partir de la incorporación del artículo 41 quinquies al Código Penal, cuyos alcances comprenden y superan ampliamente las previsiones del actual artículo 213 del Código Penal, corresponde derogar esta última figura.

Por último, se crea un nuevo tipo penal que se incorpora al título XIII del Código Penal de los “Delitos contra el orden económico y financiero” a efectos de reprimir de una manera específica la financiación de los actos terroristas individuales y la de las organizaciones terroristas, sean éstas nacionales o internacionales.

(C.D.-88/11)

Proyecto de ley en revisión por el cual se incorpora al título XIII del Código Penal de la Nación las principales conductas punibles que afectan el orden económico y financiero

Señor presidente, por ley 26.683 se legisló la figura penal del lavado de activos en forma autónoma, previéndose también la posibilidad de extender la sanción por este delito al autor del delito precedente. Se incorporó asimismo la responsabilidad penal de las personas jurídicas y se instrumentó legalmente la figura del decomiso civil. Con esas reformas nuestro país adaptó su legislación penal a los estándares y recomendaciones más avanzadas en la materia, cumpliendo de tal modo las observaciones efectuadas por el GAFI.

El proyecto en tratamiento se encuentra en esta misma línea, avanzando en la tipificación de los delitos de uso de información privilegiada y manipulación de valores negociables. La finalidad del mismo es crear nuevas herramientas que permitan fortalecer al Estado nacional en su misión de proteger la estabilidad económica obtenida en un contexto de crisis internacional.

En este proyecto entonces se incorpora al Código Penal una nueva agravante en su parte general, por la cual se intensifica la pena de cualquier delito que sea cometido con finalidad terrorista y se reformula y reubica el delito de financiación del terrorismo.

En lo que respecta a la autoría y participación, en este proyecto se incluye a los directores, miembros del órgano de fiscalización, accionistas, representantes de la sociedad y a todo aquel que preste funciones o desempeñe una tarea laboral o profesional dentro de la sociedad emisora, ampliándose el círculo de autores, antes acotado a quienes tenían contacto directo con la información.

Las penas previstas en el dictamen van de uno a cuatro años de prisión, multa equivalente al monto de la operación e inhabilitación especial de hasta cinco años, pudiendo ser agravadas (con pena de dos a seis años) cuando el autor cometa el delito con habitualidad o en aquellos casos que obtenga un beneficio o evite un perjuicio económico, situación que podría generarse cuando el autor utilice información para liquidar valores negociables frente a bajas en su cotización.

La pena se elevará hasta ocho años de prisión e inhabilitación especial por igual cantidad de tiempo si quien utiliza o suministra información reviste ciertas características que exijan de él un deber especial de lealtad, diligencia o contralor.

En el proyecto queda tipificado también el delito de manipulación de valores negociables, que reprime penalmente toda conducta que implique alterar o mantener en un determinado precio un valor negociable, mediante la utilización de diferentes ardides como la difusión de noticias falsas o con negociaciones fingidas.

La figura se agravará (con pena de dos a seis años) cuando el delito sea cometido por representante, administrador o fiscalizador de una sociedad.

Para proteger el sistema financiero, se incluyen dos figuras penales: *a)* una destinada a reprimir aquellos casos de intermediación financiera realizada por fuera del alcance regulatorio y supervisor de la autoridad de control y *b)* otra dirigida a reprimir los procesos de captación de fondos del público a través de mecanismos fraudulentos.

En el proyecto se reprime también, con prisión de uno a seis años a los empleados y funcionarios de entidades financieras que reciban indebidamente dinero o algún otro beneficio económico, como condición para celebrar operaciones crediticias, financieras o bursátiles.

Finalmente el proyecto regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas mediante la remisión a las reglas generales previstas en el artículo 304 del Código Penal.

Por las razones expuestas señor presidente, voto afirmativamente los mencionados proyectos que vienen con media sanción de la Cámara de Diputados.

10

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
MARINO

**Modificaciones al Código Penal y a la Ley Penal
Tributaria.**

(O.D. N° 924/11, O.D. N° 923/11 y O.D. N° 922/11)

Señor presidente:

Comienzo mi exposición haciendo un escueto análisis de contexto económico y los cambios que se van sucediendo en él, porque implican dar marco al escenario en el cual se ejecutaría el presupuesto que hoy estamos considerando.

Dentro de ese análisis corresponde también ver las medidas que el Poder Ejecutivo ha implementado últimamente y los cambios que las mismas están generando.

A esta altura nadie pone en duda que la crisis financiera internacional ya está provocando efectos en nuestra vida cotidiana. Digo esto porque en algún momento se ha sugerido desde el oficialismo que la Argentina podría llegar a estar blindada de los avatares ocasionados por la crisis.

Lo cierto es que en la medida que los principales líderes europeos no acuerden las soluciones indispensables para reimpulsar el crecimiento económico, no ya sobre la base del ajuste, sino a partir de políticas de crecimiento que apunten a expandir la demanda, la salida de la crisis será una ilusión.

Respecto de cuáles son los canales de contagio y como a partir de ellos los mercados emergentes como el nuestro se verán afectados, tanto los economistas que responden a una corriente de pensamiento heterodoxa, como de los otros, coinciden en que esto sucederá de dos maneras.

En principio a partir de un endurecimiento en las condiciones para colocar deudas en los mercados, algo que no perjudica directamente a nuestro país ya que hace tiempo que éste no ha vuelto a colocar deuda en los mercados internacionales.

En segundo lugar, el contagio procederá a través de la implicancia que conllevará el achatamiento del comercio mundial fruto de las menores perspectivas de crecimiento. En la medida en que el mundo crece menos, menor será la demanda de nuestros saldos exportables, lo que sin duda redundará negativamente en el conjunto de la economía.

A este escenario habría que añadirle las consecuencias que generan los problemas domésticos de la agenda económica, siendo muchos de ellos auto infringidos.

Dentro de ellos se pueden destacar los efectos colaterales, no deseados supongo, que han ocasionado los nuevos controles que se han implementado sobre el mercado de cambios.

¿Qué es lo que pasó? Como la economía argentina arrastra una asignatura pendiente no abordada, que

es la inflación, los pequeños ahorristas y los grandes operadores del mercado comenzaron a percibir, cada vez con mayor contundencia, que en algún momento el tipo de cambio tendría que ajustarse a los efectos de recuperar al competitividad perdida por el incremento de precios.

Esto derivó en un sostenido proceso de dolarización, que provocó una erosión importante de las reservas internacionales del Banco Central.

A contramano de lo que hubiera sugerido el sentido común, que no será otra cosa que solucionar el tema de la inflación: la alternativa que se eligió fue reprimir la demanda de dólares.

Esto ocasionó pánico, básicamente en los pequeños ahorristas que son los que menos información tienen, lo que desembocó en una profundización de la dolarización, dejando como resultado un nivel más elevado de tasas de interés, que amenaza con lesionar las propias bases de lo que se denomina “el modelo”.

Fue la expectativa devaluatoria lo que provoca la fenomenal fuga, y genera el ajuste de la tasa de interés. Esto ocurre porque los bancos se ven obligados a ofrecerles mayores rendimientos a los ahorristas para incentivarlos a dejar allí su dinero.

Esto, lógicamente ha provocado también un ajuste en las tasas activas, es decir, la que las entidades perciben por los préstamos que otorgan.

Ya existen indicios que demuestran que este ajuste de tasas irá lentamente enfriando el consumo, justamente la variable que explica más del 70 % de nuestro producto bruto.

Además, y complicando aún más el panorama, no deberíamos olvidar algunas señales preocupantes:

En principio, el derrumbe del precio de la soja, que en los últimos noventa días perdió un cuarto de su valor. Analistas especializados ya hablan de una pérdida en el valor de la cosecha 2011/2012 del orden de los 4.000 millones de dólares.

Esto significa no sólo un menor ingreso de divisas, y una merma en la recaudación de impuestos vía retenciones, sino también menor ingreso para los productores, lo que ocasionará algún deterioro en el interior profundo del país, donde las economías regionales giran en torno a las actividades que desarrolla el sector primario.

Y como frutilla del postre, deberíamos incorporar a este análisis los problemas que traerá la quita de subsidios. Antes que nada quisiera aclarar mi postura sobre este tema.

Estoy absolutamente de acuerdo con que el Estado no debe subsidiar el consumo de servicios públicos de los sectores con mayor poder adquisitivo de nuestra sociedad, e incluso con que también se debe revisar los subsidios que perciben los sectores medios de esta materia.

El problema aquí es la oportunidad, es decir, el momento que ha elegido el gobierno para abordar la cuestión.

Porque complementariamente a los inconvenientes que ha ocasionado el ajuste de tasas de interés que encareció el crédito, y que obliga a que las familias y las empresas destinen mayores recursos para cumplir con el pago de los servicios públicos; lo que provoca que quede menos dinero para consumir.

En efecto, esto no constituye otra cosa más que el clásico ajuste procíclico, sobre la base de medidas que se van apropiando cada vez más de una mayor porción de ingreso, agregándose también los efectos que ocasionara el ajuste de las tasas municipales para retribución de servicios y los aumentos en impuestos provinciales, compromisos que también hay que cumplir y que dejarán como resultado una demanda más débil.

Queda claro que el problema de fondo es la inflación, y las dificultades del gobierno para advertir el cambio de escenario.

Este cambio de escenario lo podríamos ubicar temporalmente hacia finales del año 2006 y principios de 2007.

Hasta esa fecha, existió un sorprendente crecimiento económico con alto nivel de consumo y baja inflación, y los famosos superávit gemelos; básicamente porque la economía iba avanzando hacia la plena ocupación de su capacidad ociosa luego de la salida de la crisis.

Cuando la economía comienza a acercarse a la plena ocupación de sus recursos, empiezan a surgir los problemas, destacándose fundamentalmente el tema de la inflación.

Si bien las tasas de crecimiento pudieron sostenerse, el precio pagado fueron las distorsiones que provocó la inflación.

Hoy esas distorsiones resultan insoportables para el gobierno, y por ello se ve obligado a iniciar el cambio del ajuste.

Esta sintonía fina a la cual se refiere la presidenta, no es otra cosa que revisar los errores del pasado. Habrá que ver qué nos deparará el destino en 2012 y cómo lo expuesto nos terminará afectando.

Respecto del proyecto de ley que hoy nos convoca, e independientemente de los conceptos que aquí se han vertido, y que tienen que ver con el tema de la autorización del pago de deudas con reservas, cuando en realidad no hay reservas de libre disponibilidad para cumplir con esos pagos; o qué pasará con las partidas destinadas a subsidios cuando el gobierno está encaminándose al recorte de los subsidios; quisiera referirme a una cuestión en particular, que afecta puntualmente a la provincia que represento.

Me refiero al segundo tramo de la obra Acueducto Río Colorado que resolverá el problema del agua en el norte provincial, y que fuera prometida por el entonces presidente doctor Néstor Carlos Kirchner, allí por octubre del año 2006.

Esta obra fue incluida en el presupuesto 2008 con el financiamiento irrisorio, y luego incorporada desde el

presupuesto 2010 en adelanto dentro de lo que se denominó Programa de Inversiones Prioritarias, que busca captar financiamiento internacional, con el respaldo de avales del Tesoro, para la concreción de las obras.

Dado el cambio en las condiciones de los mercados de capitales internacionales fruto de la crisis que azota al mundo, parece que estas obras en la medida que el gobierno no tenga alternativa, están cada vez más lejos de su concreción.

Mientras tanto los pampeanos siguen esperando, por ello sería bueno que el gobierno cumpla con los compromisos que asumió en el marco de este Programa de Inversiones Prioritarias.

11

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR CANO

Modificaciones al Código Penal y a la Ley Penal Tributaria.

(O.D. N° 924/11, O.D. N° 923/11 y O.D. N° 922/11)

Señor presidente:

La distribución del ingreso en forma equitativa para todos los argentinos, se logra haciendo un presupuesto con una mejor distribución del gasto público, por provincias y regiones, con un sistema impositivo progresivo, limitando el impacto de la inflación, desarrollando un sistema de protección social para los desempleados, reduciendo la deserción escolar, manteniendo y ampliando el programa de Asignación Universal por Hijo.

El principal gasto del gobierno, 176.440 millones de pesos, corresponde al sistema de seguridad social: jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, transferencias a cajas provinciales, y aquí se incluye a la asignación universal por hijo.

El segundo gasto en importancia corresponde al Ministerio de Planificación y Desarrollo con 75.535 millones de pesos. Acá las mayores partidas de este ministerio ya no se destinan a las obras públicas, sino a los subsidios a las empresas de transporte y energía.

- Los subsidios a las tarifas de energía eléctrica.
- Las transferencias a las empresas de colectivos.
- Los subsidios a los concesionarios de trenes.
- La subvención a Aerolíneas Argentinas.

Frente a estos grandes números del presupuesto, algunos programas empujados, por ejemplo:

– El aumento de los subsidios en transporte y electricidad es equivalente a la totalidad de las partidas del Ministerio de Salud: 10.137 millones de pesos.

– Ese monto equivale a 5 veces la suba de recursos prevista para las universidades nacionales.

– En proporción, el costo de subvencionar el gas de los pobres es irrelevante; ya que el Plan Garrafa para Todos, representa el 1,3 % de lo que se gasta en energía y transporte, insume 356 millones de pesos.

En las facturas de electricidad, podemos observar un cuadro comparativo que dice: “Si yo viviera en Córdoba, o Santa Fe, hubiera tenido que pagar el doble”. Esto nos confirma la distorsión de la distribución de los recursos del Estado.

Siguiendo con el análisis de los subsidios a la actividad privada, encontramos que la transferencia de la contribución de los usuarios, terminó subsidiando por más de 8 años el consumo de energía a empresas privadas, como bancos, casinos, aeropuertos, etcétera. Por ejemplo el Casino Trillem en Tigre que tiene un consumo anual de 3,6 millones de pesos, por la política subsidiaria kirchnerista paga tan sólo 1,6 millones de pesos, integrando los 2 millones restantes la partida de subsidios previstas en el presupuesto 2011. Los sectores de ingresos muy altos, como los que viven en Puerto Madero, Palermo Chico, otros barrios de la Capital y *countries* del Gran Buenos Aires, donde viven muchos funcionarios públicos, y representan en los gastos alrededor de 600 millones de pesos. Por ello, cuando Boudou renunció al subsidio, me acordé de Facundo Cabral, cuando decía: “Donó y no devolvió”, en este caso, no devolvió nada de los subsidios que recibió durante 8 años.

El presupuesto de Desarrollo Social creció un 700 % desde el año 2003, pero los niveles de pobreza se mantienen casi igual, bajaron muy poco, los indicadores se mantienen muy altos, y casi el 40 % de los argentinos se encuentran debajo de la línea de pobreza.

No existen garantías de una ayuda con equidad, a pesar de la existencia de partidas presupuestarias con abundantes fondos destinados a este fin.

El investigador del Conicet y la Universidad Católica Argentina, Agustín Salvia, expresó que: “Los programas sociales de transferencia de ingresos encarados por el gobierno mejoran la capacidad de consumo, pero no resuelven los problemas estructurales de la pobreza, las partidas que deberían aumentar, tendrían que ser las de educación y salud”.

El informe de la Fundación Siena, muestra que el Plan de Seguridad Alimentaria concentró el 56 % de su ejecución en la Capital, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires, pese a que Formosa y Santiago del Estero tienen los niveles de pobreza más elevados del país. Sólo recibieron un 0,1 % y 3,1 % de esos fondos. Algo similar ocurre con los planes de atención a la Madre y el Niño, y el Plan Techo Digno.

Lo relevante aquí, es que queda demostrado que una decisión política de la distribución de los recursos hacia unos u otros sectores, define el destino del país y sus ciudadanos.

Presupuesto y federalismo

Se puede demostrar con estos números cómo las provincias están perdiendo participación en los recursos, lo cual les convierte en dependientes política y económicamente del gobierno nacional, y de sus préstamos, perdiendo necesariamente sus autonomías.

Partidas discrecionales

Podemos observar las grandes brechas que se generan en la política del gasto en referencia a la distribución de recursos, entre una provincia u otra y que se acentúa más de acuerdo a la cantidad de sus habitantes.

Por ejemplo, en las transferencias corrientes brutas Tucumán tiene asignados 3.043 millones de pesos, La Pampa 688 millones, en cambio Buenos Aires tiene 21.594 millones y la Ciudad de Buenos Aires 68.100 millones.

En las transferencias corrientes brutas per cápita, Entre Ríos recibe 1.256 pesos, Chaco 1.459 pesos, Santa Cruz 6.616 pesos y la Ciudad de Buenos Aires 23.563 pesos.

En las transferencias corrientes con distribución geográfica de subsidios, Mendoza recibe 4.036 millones de pesos, Santa Fe 9.100 millones, la Ciudad de Buenos Aires 30.442 millones y la provincia de Buenos Aires 39.201 millones.

En las transferencias corrientes con distribución geográfica de subsidios per cápita, Entre Ríos recibe pesos 1.937, Jujuy pesos 2.031, en cambio Santa Cruz recibe pesos 7.442 y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pesos 10.533.

Queda demostrado que la cantidad de subsidios para las empresas que prestan servicios públicos es astronómicamente diferente entre una provincia y otra. Esto repercute en las tarifas que se pagan en las distintas provincias, por ejemplo: un habitante de Buenos Aires, paga por el servicio de energía eléctrica un 40 % de lo que paga un ciudadano de Tucumán. O que el valor del boleto de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires es de 1,10 pesos, y el mínimo en Tucumán es de 2 pesos.

Esta situación mantenida en el tiempo, aumenta la diferencia en la calidad de vida de los argentinos, según la ubicación geográfica de su residencia.

Otro ejemplo es el análisis del presupuesto en bienes de capital, en el plan de obras públicas se percibe que las obras de infraestructura que darán un desarrollo sustentable a la región donde se localiza, son ejecutadas en las provincias centrales que tienen un índice de desarrollo humano superior. Y es lo que permite que en aquellas provincias se asiente el 80 % de la población argentina, fruto de migraciones internas donde los ciudadanos tratan de encontrar el trabajo, la vivienda y los servicios de educación que permitan mejorar su calidad de vida.

Transferencias de capital - per cápita

Santa Fe recibe \$ 155, Córdoba \$ 277, Buenos Aires \$ 302, La Rioja \$ 1.958, Santa Cruz \$ 1.904 y la Ciudad de Buenos Aires \$ 3.104.

Transferencias de capital

San Luis recibe noventa y cinco millones de pesos, Jujuy trescientos veinticuatro, Santa Cruz setecientos

noventa y seis, Buenos Aires cuatro mil setecientos catorce millones y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ocho mil novecientos setenta y uno.

La discrecionalidad se evidencia también en los números del presupuesto 2012, y se muestra en los datos surgidos de la planilla de distribución del gasto por provincias y por habitantes.

Las distribuciones discrecionales

La distribución de los recursos de los argentinos entre las provincias, surge en primera instancia, y de acuerdo a lo que dispone la Constitución Nacional, a través de la Coparticipación Federal de Impuestos, y de manera compensatoria, por las decisiones discrecionales de los funcionarios nacionales.

En el segundo de los casos, por las facultades delegadas por el presupuesto y otras normas, estas transferencias nacen de las partidas globales que los administradores del gobierno central reparten.

En estas operaciones de giros de recursos a las provincias se pudo ver que también hay jurisdicciones mejor consideradas que otras, o en otro orden, peor maltratadas.

En los extremos de los gobiernos beneficiados, Santa Cruz que ganó un 37,4 % más que las otras provincias y el más perjudicado está encabezado por San Luis que perdió un 13,9 %.

No debatir presupuestos es no discutir programas de gobierno, lo que lleva a confundir lo que es manejo arbitrario con “gestión pública”, con obras y servicios para la salud, la educación, la seguridad, o la cultura.

Evidentemente Santa Cruz es la provincia más favorecida en el reparto de un fondo discrecional previsto en el presupuesto 2012, además una de las más beneficiadas en la distribución de los recursos para rutas y caminos. Y si se tiene en cuenta la población de cada distrito, Santa Cruz encabeza el ranking por lejos.

Geográficamente desigual

El ingreso per cápita familiar en los aglomerados más ricos, como la Ciudad de Buenos Aires, Ushuaia y Río Gallegos, es alrededor del doble de la media del país.

Las provincias más pobres de la Argentina; Formosa y Santiago del Estero, poseen ingresos ubicados en la mitad de la media de las provincias. Los hogares de las zonas más ricas tienen ingresos cuatro veces superiores a los de las zonas más pobres.

El destino de los fondos sociales tampoco logra identificar las necesidades de cada provincia. Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires, y las provincias de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba concentran el 89 % de los 1.500 millones presupuestados para el Plan Argentina Trabaja.

La distribución de los ingresos plantea desafíos futuros para la Argentina. Ahora bien, ¿qué papel jugó la buena senda que tomó la economía en los últimos

años?, hay una parte de la sociedad que no recibe el beneficio del crecimiento porque se encuentra ante una pobreza crónica.

La población más pobre no ha mejorado su situación de pobreza desde el año 2002 a la actualidad. El crecimiento económico no resulta suficiente para los sectores sociales más vulnerables, pues a pesar de un robusto producto bruto interno, la inflación los ha vuelto a golpear con fuerza.

El último indicador de NBI es del 17,7 %.

El total del país, es del 17,7 %, la Ciudad de Buenos Aires tiene el 7,8 %, Mendoza el 15,4 %, los extremos de los gobiernos de Salta el 31,6 %, Formosa el 33,6 % y Chubut el 15,5 %.

Existe una gran desigualdad en nuestro país, hay provincias donde un tercio de la población no tiene cubiertas las necesidades básicas, mientras otras tienen indicadores similares a los de las naciones desarrolladas.

El 30 % de la población no tiene servicios de agua corriente y el 60 % no dispone de servicios de cloacas. Es inconcebible que en un país con una de las mayores riquezas hídricas del mundo, existan 12 millones de habitantes sin servicios de agua corriente, y existan partidas que benefician con exenciones impositivas a las mineras, que son una de las principales consumidoras de los recursos hídricos, y que luego de usados los regresan contaminados con toneladas de cianuro.

Las provincias más pobres tienen un porcentaje de años de vida perdidos, cuatro veces mayor que las provincias más ricas. Los sectores más pobres de la población, tienen significativamente peor estado de salud, con mayor proporción de enfermedades potencialmente evitables y mayor mortalidad infantil y materna.

Indicadores de mortalidad infantil por regiones

El total del país es del 12,5 ‰ (por mil), Región Centro 11,8 ‰ (por mil), Cuyo el 12,3 ‰ (por mil), Noroeste el 13,5 ‰ (por mil), Nordeste el 16,7 ‰, y Región Patagónica el 10,3 ‰ (por mil).

Indicadores de mortalidad materna por regiones

Total del país 4, Región Centro 3,1, Cuyo 2,3, Noroeste 6,2, Nordeste 8 y Región Patagónica el 3,6 (valores expresados en tanto por mil).

Datos tomados de la página www.indec.gov.ar (página oficial del Ministerio de Economía /INDEC).

Estos ejemplos de la vida diaria de los habitantes de la Nación, no son nuevos y vienen de larga data, de gran cantidad de ejecuciones de presupuestos nacionales, de épocas de producto bruto interno flaco, y otras de producto interno bruto gordo, como los de los últimos ocho años.

Estos informes muestran las principales causas de las migraciones internas de la población, donde nuestros comprovincianos del Noroeste y Nordeste, se desplazan a las periferias de las grandes ciudades, buscando mejorar su calidad de vida, y algunos sin suerte, terminan

haciendo crecer las villas miseria del cono urbano de Buenos Aires.

Efectos demográficos en la asignación de recursos

En cuanto a la distribución de la población en el territorio no ha sido, ni es, en la actualidad homogénea. La dinámica demográfica de las provincias ha determinado la magnitud de su ocupación, definiendo perfiles demográficos y económicos.

En nuestra historia existen dos actores: la Nación y las provincias, como protagonistas principales. Y desde la Nación se aprobaron y ejecutaron políticas de gastos con los recursos de todos los argentinos que fueron dibujando el mapa demográfico del país.

Esto se refleja en el último censo nacional realizado en octubre del año pasado, donde se percibe que el 70 % de los argentinos están concentrados en solo seis provincias, (Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Tucumán) de las veinticinco en total.

De los datos elaborados por el INDEC de distribución relativa de la población por regiones, observamos el gran crecimiento producido en la región de Buenos Aires, y la Ciudad de Buenos Aires desde fines del siglo diecinueve hasta la década del ochenta, en detrimento de la región Noroeste. De esos datos observamos que la Ciudad de Buenos Aires tiene 14.451 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que nos genera la inquietud de preguntarnos, ¿por qué se concentraron tantos argentinos en tan pequeño espacio?, y la respuesta la brindan los que estudiaron los motivos de las migraciones.

Una primera hipótesis, basada en la teoría de la inversión en capital humano, y de acuerdo a esta corriente neoclásica, las migraciones internas se analizan según los costos y retornos derivados de esa inversión en capital humano al migrar. Entre los retornos, se encuentran las diferencias de salario que el migrante espera obtener con las mejores oportunidades de trabajo, mientras que los costos, son determinados por los gastos de vivienda, transporte y el tiempo de adaptación al nuevo lugar de residencia.

Es fuerte la relación que existe entre migraciones internas y el desarrollo económico en términos de selección de personas.

Se puede decir que un conjunto de fuerzas socioeconómicas, técnicas, culturales y políticas, determinan el atractivo de las diversas áreas para su ocupación, y dependen del:

- Grado de desarrollo y potencial económico.
- Aspectos educativos.
- Calidad de vida que promete a sus habitantes.
- De la seguridad ciudadana.
- Condicionamientos y estabilidad política.
- Factores socio-comunitarios.

Cuando se aprobaban las leyes para los fondos de los conurbos de Buenos Aires, Rosario y Santa Fe,

los parlamentarios decían: “No es baladí remarcar que la situación o estado de necesidad que se invoca para el conurbano es real y tangible, pues a nadie se le escapa que la grave crisis por la que atraviesa el país ha agudizado de manera sin precedentes las necesidades de los hogares, en especial en lo que respecta a las necesidades básicas para la subsistencia. Por ello no es de extrañar que estas provincias hayan visto incrementada en forma manifiesta los requerimientos en materia de salud, alimentación, educación, etcétera, incluyendo en los servicios básicos a personas provenientes de otras provincias carentes de infraestructura suficiente para atender necesidades en tales aspectos. Es de público y notorio conocimiento que los grandes centros urbanos, por sus características, no escapan a idénticos y mayores requerimientos de parte de poblaciones carenciadas provenientes de provincias vecinas, tal como acontece con las municipalidades de la provincia de Buenos aires, y las de Rosario y Santa Fe”.

Todo lo manifestado por los representantes de las provincias más ricas viene a brindarle el valor empírico a esta tesis del histórico padecimiento de las poblaciones del interior por las medidas de gobierno tomada por la Nación y plasmadas en sucesivos presupuestos.

Tal vez, los gobernantes y legisladores cuando se vendía todo el capital acumulado de los argentinos, no entendieron que los problemas que se generaban en los grandes centros urbanos y que tuvieron la génesis en la expulsión de nuestros comprovincianos por políticas unitarias, se resolvían en su origen, en las provincias de las que provenían, la solución la encontrarían con claridad en el interior del país mediante programas y la asignación de los recursos necesarios en los presupuestos.

Esta política sigue ausente en la formulación del presupuesto modelo 2012, cuando ya se vivió un crecimiento y estabilidad económica importante.

Éste es un país inmensamente rico y peligrosamente despoblado, cuando una de las máximas de Alberdi es “Gobernar es poblar”, pero poblar con equidad y justicia distributiva, poblar en todo el territorio argentino y no centrar la renta y su gente en grandes conurbanos que se hacen inseguros y peligrosos.

Del cuadro de población total del país y de las provincias en los años 2001 y 2010, surge claramente que en aquellas provincias donde se destinaron mayor cantidad de recursos por habitante en los sucesivos presupuestos se registraron los mayores crecimientos relativos de inter censales de la población.

La afirmación efectuada en el párrafo anterior surge de las planillas analizadas sobre la distribución de los gastos en los presupuestos por provincias y por habitantes. Allí se mostró la falta de equidad en el destino de los fondos donde ciertas provincias eran favorecidas y otras desamparadas en el reparto presupuestario.

Las provincias beneficiadas son las que muestran mayores tasas de crecimiento poblacional en la última década: Santa Cruz aumentó sus habitantes en un

39,1 %, Tierra del Fuego 25,8 % y Chubut 23,2 %. Es así como se pudo comprobar tan a mediano plazo la injerencia que tienen algunas decisiones presupuestarias en la Nación.

Tucumán es la única provincia en la historia nacional que descendió su población, después del cierre en octubre de 1966 de once ingenios azucareros desapareció casi todo. Tenían que irse como parte del masivo éxodo tucumano. El cierre produjo una caída del producto bruto interno del 35 %. Cerca del 30 % de la población tuvo que emigrar, en un par de meses casi trescientos mil tucumanos, por una decisión del gobierno nacional fueron a poblar las numerosas villas miseria del Gran Buenos Aires.

Conclusión

De todo lo analizado anteriormente quedó en evidencia que el presupuesto es más que una simple herramienta de la administración pública, sino que es también una ley que debe servir de base para el desarrollo de una Nación.

Se pudo demostrar que las políticas de gobierno plasmadas en el presupuesto influyen de un modo evidente en la vida de todos los ciudadanos del país.

La importancia de que elaborar un presupuesto requiere de mucho estudio, preparación y definición de los objetivos que persigue, implica conocer la historia de las provincias con sus necesidades y diversidades, cuáles son sus recursos, fuentes con las que cuentan y con las que no, y así buscar el modo más equitativo de distribución. Para ello se requiere el debate.

Como podemos ver, los creadores de la ley de presupuesto tenían en su mente las prioridades a proteger, donde no se visualizan: federalismo, libertad, derechos humanos, igualdad, etcétera, y sí necesidades de concentrar el poder.

12

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
PÉRSICO

Régimen de trabajo agrario.
(O.D. Nº 921/11)

Señor presidente:

Con respecto al proyecto de ley venido en revisión sobre la regulación del trabajo agrario, se ha explicado en profundidad los aspectos generales de la iniciativa por el miembro informante y por los senadores preopinantes. Por ello, quiero especialmente focalizar mi discurso en el capítulo X sobre “La prohibición del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente” porque considero un avance sustancial la adecuación de la legislación vigente a los tratados internacionales suscritos por nuestro país al respecto, así como también a las recomendaciones de organismos internacionales,

CONGRESO NACIONAL

CÁMARA DE SENADORES

SESIONES EXTRAORDINARIAS DE 2011

ORDEN DEL DÍA N° 924

Impreso el día 20 de diciembre de 2011

SUMARIO

COMISIÓN DE JUSTICIA Y ASUNTOS PENALES

Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión por el que se incorporan al título XIII del Código Penal de la Nación las principales conductas punibles que afectan el orden económico y financiero. (C.D.-88/11).

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales ha considerado el proyecto de ley venido en revisión de la Honorable Cámara de Diputados (C.D.-88/11), por el cual se incorporan al título XIII del Código Penal de la Nación las principales conductas punibles que afectan el orden económico y financiero; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2011.

Pedro G. Á. Guastavino. – Daniel F. Filmus. – María J. Bongiorno. – Pablo González. – Marcelo J. Fuentes. – Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Carlos S. Menem. – Rolando A. Bermejo.

**Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación**

(15 de diciembre de 2011)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 77 del Código Penal, por el siguiente:

Artículo 77: Para la inteligencia del texto de este código se tendrán presente las siguientes reglas:

Los plazos a que este código se refiere serán contados con arreglo a las disposiciones del Código Civil. Sin embargo, la liberación de los condenados a penas privativas de libertad se efectuará al mediodía del día correspondiente.

La expresión “reglamentos” u “ordenanzas”, comprende todas las disposiciones de carácter general dictadas por la autoridad competente en la materia de que traten.

Por los términos “funcionario público” y “empleado público”, usados en este código, se designa a todo el que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente.

Por el término “militar” se designa a toda persona que revista estado militar en el momento del hecho conforme la ley orgánica para el personal militar.

Los funcionarios públicos civiles que integran la cadena de mando se encuentran asimilados al personal militar con relación a los delitos que cometan en su carácter de tales, cuando produzcan actos o impartan órdenes o instrucciones como integrantes de la cadena de mando si las mismas implican comisión de delito o participación en el mismo.

Con la palabra “mercadería”, se designa toda clase de efectos susceptibles de expendio.

El término “capitán” comprende a todo comandante de embarcación o al que le sustituye.

El término “tripulación” comprende a todos los que se hallan abordo como oficiales o marineros.

El término “estupefacientes” comprende los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias susceptibles de producir dependencia física o psíquica, que se incluyan en las listas que se elaboren y actualicen periódicamente por decreto del Poder Ejecutivo nacional.

El término “establecimiento rural” comprende todo inmueble que se destine a la cría, mejora o engorde del ganado, actividades de tambo, granja o cultivo de la tierra, a la avicultura u otras crianzas, fomento o aprovechamiento semejante.

El término “documento” comprende toda representación de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento, archivo o transmisión.

Los términos “firma” y “suscripción” comprenden la firma digital la creación de una firma digital o firmar digitalmente.

Los términos “instrumento privado” y “certificado” comprenden el documento digital firmado digitalmente.

El término “información privilegiada” comprende toda información no disponible para el público cuya divulgación podría tener significativa influencia en el mercado de valores.

Art. 2º – Sustitúyese el artículo 300 del Código Penal de la Nación, por el siguiente:

Artículo 300: Serán reprimidos con prisión de seis (6) meses a dos (2) años:

1º El que hiciere alzar o bajar el precio de las mercaderías por medio de noticias falsas, negociaciones fingidas o por reunión o coalición entre los principales tenedores de una mercancía o género, con el fin de no venderla o de no venderla sino a un precio determinado.

2º El fundador, director, administrador, liquidador o síndico de una sociedad anónima o cooperativa o de otra

persona colectiva, que a sabiendas publicare, certificare o autorizare un inventario, un balance, una cuenta de ganancias y pérdidas o los correspondientes informes, actas o memorias, falsos o incompletos o informare a la asamblea o reunión de socios, con falsedad, sobre hechos importantes para apreciar la situación económica de la empresa, cualquiera que hubiere sido el propósito perseguido al verificarlo.

Art. 3º – Incorpórese como artículo 306 del Código Penal de la Nación, el siguiente:

Artículo 306: Será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4) años, multa equivalente al monto de la operación, e inhabilitación especial de hasta cinco (5) años, el director, miembro de órgano de fiscalización, accionista, representante de accionista y todo el que por su trabajo, profesión o función dentro de una sociedad emisora, por sí o por persona interpuesta, suministrare o utilizare información privilegiada a la que hubiera tenido acceso en ocasión de su actividad, para la negociación, cotización, compra, venta o liquidación de valores negociables.

Art. 4º – Incorpórese como artículo 307 del Código Penal de la Nación, el siguiente:

Artículo 307: El mínimo de la pena prevista en el artículo anterior se elevará a dos (2) años de prisión y el máximo a seis (6) años de prisión, cuando:

- a) Los autores del delito utilizaren o suministraren información privilegiada de manera habitual;
- b) El uso o suministro de información privilegiada diera lugar a la obtención de un beneficio o evitara un perjuicio económico, para sí o para terceros.

El máximo de la pena prevista se elevará a ocho (8) años de prisión cuando:

- c) El uso o suministro de información privilegiada causare un grave perjuicio en el mercado de valores;

- d) El delito fuere cometido por un director, miembro del órgano de fiscalización, funcionario o empleado de una entidad autorregulada o de sociedades calificadoras de riesgo, o ejerciera profesión de las que requieren habilitación o matrícula, o un funcionario público. En estos casos, se impondrá además pena de inhabilitación especial de hasta ocho (8) años.

Art. 5º – Incorpórese como artículo 308 del Código Penal de la Nación, el siguiente:

Artículo 308:

1. Será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4) años, multa equivalente al monto de la operación e inhabilitación de hasta cinco (5) años, el que:

- a) Realizare transacciones u operaciones que hicieren subir, mantener o bajar el precio de valores negociables u otros instrumentos financieros, valiéndose de noticias falsas, negociaciones fingidas, reunión o coalición entre los principales tenedores de la especie, con el fin de producir la apariencia de mayor liquidez o de negociarla a un determinado precio;
- b) Ofreciere valores negociables o instrumentos financieros, disimulando u ocultando hechos o circunstancias verdaderas o afirmando o haciendo entrever hechos o circunstancias falsas.

2. Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años, cuando el representante, administrador o fiscalizador de una sociedad comercial de las que tienen obligación de establecer órganos de fiscalización privada, informare a los socios o accionistas ocultando o falseando hechos importantes para apreciar la situación económica de la empresa o que en los balances, memorias u otros documentos de contabilidad, consignare datos falsos o incompletos.

Art. 6º – Incorpórese como artículo 309 del Código Penal de la Nación, el siguiente:

Artículo 309: Será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4) años, multa de dos (2) a ocho (8) veces el valor de las operaciones realizadas e inhabilitación especial hasta seis (6) años, el que por cuenta propia o ajena, directa o indirectamente, realizare actividades de intermediación financiera, bajo cualquiera de sus modalidades, sin contar con autorización emitida por la autoridad de supervisión competente.

En igual pena incurrirá quien capture ahorros del público en el mercado de valores o prestare servicios de intermediación para la adquisición de valores negociables, cuando no contare con la correspondiente autorización emitida por la autoridad competente.

El monto mínimo de la pena se elevará a dos (2) años cuando se hubieran utilizado publicaciones periodísticas, transmisiones radiales o de televisión, Internet, proyecciones cinematográficas, colocación de afiches, letreros o carteles, programas, circulares y comunicaciones impresas o cualquier otro procedimiento de difusión masiva.

Art. 7º – Incorpórese como artículo 310 del Código Penal de la Nación, el siguiente:

Artículo 310: Serán reprimidos con prisión de uno (1) a cuatro (4) años, multa de dos (2) a seis (6) veces el valor de las operaciones e inhabilitación de hasta seis (6) años, los empleados y funcionarios de instituciones financieras y de aquellas que operen en el mercado de valores que insertando datos falsos o mencionando hechos inexistentes, documentaren contablemente una operación crediticia activa o pasiva o de negociación de valores negociables, con la intención de obtener un beneficio o causar un perjuicio, para sí o para terceros.

En la misma pena incurrirá quien omitiere asentar o dejar debida constancia de alguna de las operaciones a las que alude el párrafo anterior.

Art. 8º – Incorpórese como artículo 311 del Código Penal de la Nación, el siguiente:

Artículo 311: Serán reprimidos con prisión de uno (1) a seis (6) años e inhabilita-

ción de hasta seis (6) años, los empleados y funcionarios de instituciones financieras y de aquellas que operen en el mercado de valores que directa o indirectamente, y con independencia de los cargos e intereses fijados por la institución, reciban indebidamente dinero o algún otro beneficio económico, como condición para celebrar operaciones crediticias, financieras o bursátiles.

Art. 9º – Incorpórese como artículo 312 del Código Penal de la Nación, el siguiente:

Artículo 312: Cuando los hechos delictivos previstos en los artículos precedentes hubieren sido realizados en nombre, o con la intervención, o en beneficio de una persona de existencia ideal, se aplicarán las disposiciones previstas en el artículo 304 del Código Penal.

Cuando se trate de personas jurídicas que hagan oferta pública de valores negociables, las sanciones deberán ser aplicadas cuidando de no perjudicar a los accionistas o titulares de los títulos respectivos a quienes no quepa atribuir responsabilidad en el hecho delictivo. A ese fin deberá escucharse al órgano de fiscalización de la sociedad.

Cuando la persona jurídica se encuentre concursada las sanciones no podrán aplicarse en detrimento de los derechos y privilegios de los acreedores por causa o título anterior al hecho delictivo. A ese fin deberá escucharse al síndico del concurso.

Art. 10. – Renumérense los artículos 306, 307 y 308 del Código Penal de la Nación como artículos 314, 315 y 316 respectivamente.

Art. 11. – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a numerar los artículos precedentes.

Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

JULIÁN DOMÍNGUEZ.

Gervasio Bozzano.

ACLARACIÓN

La sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al mensaje del Poder Ejecutivo 1.644 de fecha 13 de octubre de 2011.

CONGRESO NACIONAL

CÁMARA DE SENADORES

SESIONES EXTRAORDINARIAS DE 2011

Anexo al ORDEN DEL DÍA N° 924

Impreso el día 20 de diciembre de 2011

SUMARIO

COMISIÓN DE JUSTICIA Y ASUNTOS PENALES

Dictamen de minoría en el proyecto de ley
venido en revisión por el que se incorpora al
título XIII del Código Penal de la Nación las
principales conductas punibles que afectan el
orden económico y financiero. (C.D.-88/11.)

Dictamen de minoría

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales ha considerado el proyecto de ley venido en revisión de la Honorable Cámara de Diputados (C.D.-88/11), por el cual se incorpora al título XIII del Código Penal de la Nación las principales conductas punibles que afectan el orden económico y financiero; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 300 del Código Penal, por el siguiente texto:

Artículo 300: Será reprimido con prisión de dos a cuatro años, multa equivalente al monto de la operación e inhabilitación especial de hasta cinco años, cuando correspondiere, el que:

- a) Realizare transacciones u operaciones que hicieren subir, mantener o bajar el precio de mercaderías, valores

negociables u otros instrumentos financieros, valiéndose de noticias falsas, negociaciones fingidas, reunión o coalición entre los principales tenedores de la mercancía, género o especie, con el fin de producir la apariencia de mayor liquidez, de no venderla o de negociar a un determinado precio y generare la obtención de un beneficio económico superior a 500 mil pesos o causare un perjuicio de idéntica magnitud;

- b) Realizare transacciones u operaciones con fondos públicos, valores negociables, instrumentos financieros u obligaciones de alguna sociedad, proporcionando indicios falsos o engañosos y generare la obtención de un beneficio económico superior a 500 mil pesos o causare un perjuicio de idéntica magnitud;
- c) El fundador, director, administrador, liquidador o síndico de una sociedad anónima o cooperativa o de otra persona colectiva, que a sabiendas publicare, certificare o autorizare un inventario, un balance, una cuenta de ganancias y pérdidas o los correspondientes informes, actas, memorias, falsos o incompletos o informare a la asamblea o reunión de socios, con falsedad o reticencia, sobre hechos importantes para apreciar la situación económica de la empresa, cualquiera hubiere sido el propósito perseguido al verificarlo.

El monto de la pena se elevará de dos a seis años cuando las conductas previstas en los incisos a) y b) de este artículo fueren cometidas por el representante, administrador o fiscalizador de una sociedad comercial de las que tienen obligación de establecer órganos de fiscalización privada, que informare a los socios o accionistas ocultando o falseando hechos importantes para apreciar la situación económica de la empresa o que en los balances, memorias u otros documentos de la contabilidad, consignare datos falsos o incompletos.

Art. 2º – Renuméranse los artículos 306, 307, y 308 como artículos 311, 312 y 313 respectivamente e incorpóranse como artículos 306, 307, 308 y 309 del Código Penal de la Nación, los siguientes:

Artículo 306: Será reprimido con prisión de dos a cuatro años, multa equivalente al monto de la operación, e inhabilitación especial de hasta cinco años, el director, miembro de órgano de fiscalización, accionista, representante de accionista y todo el que por su trabajo, profesión o función dentro de una sociedad emisora, por sí o por persona interpuesta, suministrare o utilizare información privilegiada a la que hubiera tenido acceso en ocasión de su actividad, para la negociación, cotización, compra, venta o liquidación de valores negociables y generare la obtención de un beneficio económico superior a 500 mil pesos o causare un perjuicio de idéntica cantidad.

Por el término “información privilegiada” se designa a toda información no disponible para el público cuya divulgación podría tener significativa influencia en el mercado de valores.

Artículo 307: El mínimo de la pena prevista en el artículo anterior se elevará de cuatro años a seis años de prisión cuando:

- a) Los autores del delito utilizaren o suministraren información privilegiada de manera habitual;
- b) El uso o suministro de información privilegiada diera lugar a la obtención de un beneficio superior a un millón de pesos o evitara un perjuicio económico de idéntica cantidad, para sí o para terceros.

El máximo de la pena prevista se elevará a ocho años de prisión cuando:

- c) El uso o suministro de información privilegiada causare un grave perjuicio en el mercado de valores;
- d) El delito fuere cometido por un director, miembro del órgano de fiscalización, funcionario o empleado de una entidad autorregulada o de sociedades calificadoras de riesgo, o ejerciera profesión de las que requieren habi-

litación o matrícula, o un funcionario público. En estos casos se impondrá además pena de inhabilitación especial de hasta ocho años.

Artículo 308: Será reprimido con prisión de dos a o seis años, multa de dos a seis veces el valor de las operaciones e inhabilitación de hasta diez años, el que insertando datos falsos o mencionando hechos inexistentes, documentare contablemente una operación crediticia activa o pasiva o de negociación de valores negociables, con la intención de obtener un beneficio o causar un perjuicio, para sí o para terceros.

En la misma pena incurrirá quien omitiere asentar o dejar debida constancia de alguna de las operaciones a las que alude el párrafo anterior.

Artículo 309: Cuando los hechos delictivos previstos en los artículos precedentes hubieren sido realizados en nombre, o con la intervención, y en beneficio de una persona de existencia ideal, se aplicarán las disposiciones previstas en el artículo 304 del Código Penal.

Cuando se trate de personas jurídicas que hagan oferta pública de valores negociables, las sanciones deberán ser aplicadas cuidando de no perjudicar a los accionistas o titulares de los títulos respectivos a quienes no quepa atribuir responsabilidad en el hecho delictivo. A ese fin deberá escucharse al órgano de fiscalización de la sociedad.

Cuando la persona jurídica se encuentre concursada las sanciones no podrán aplicarse en detrimento de los derechos y privilegios de los acreedores por causa o título anterior al hecho delictivo. A ese fin deberá escucharse al síndico del concurso.

Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 20 de diciembre de 2011.

*Ernesto R. Sanz. – Luis P. Naidenoff. –
Mario J. Cimadevilla.*